

64ª REUNION — 3ª SESION EXTRAORDINARIA — FEBRERO 4 DE 1987

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese y Roberto Pascual Silva

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Luis Oscar
ABDALA, Oscar Tuplé
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALDERETE, Carlos Alberto
ALENDE, Oscar Eduardo
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALSOGARAY, María Julia
ALTERACH, Miguel Ángel
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ARSON, Héctor Roberto
AUSTERLITZ, Federico
AUYERO, Carlos
AVALOS, Ignacio Joaquín
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BAKIEDJIAN, Isidro Roberto
BARBEITO, Juan Carlos
BARRENO, Rómulo Víctor
BELARRINAGA, Juan Bautista
BELLO, Carlos
BERCOVICH RODRIGUEZ, Raúl
BERNASCONI, Tulio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIANCHI, Carlos Humberto
BIANCHI de ZIZZIAS, Ella A.
BIANCIOOTTO, Luis Fidel
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Jesús Abel
BONIFASI, Antonio L.
BONINO, Alberto Cecilio
BORDA, Osvaldo
BORDÓN GONZÁLEZ, José O.
BOTTA, Felipe Esteban
BEIZ de SANCHEZ, Onofre
BRIZUELA, Delfor Augusto
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Juan Arnaldo
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CAFERRI, Oscar Néstor

CAFIERO, Antonio Francisco
CAMISAR, Osvaldo
CANATA, José Domingo
CANGIANO, Augusto
CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
CARIGNANO, Raúl Eduardo
CARMONA, Jorge
CARRANZA, Florencia
CASTILLO, Miguel An. el
CASTRO, Juan Bautista
CLERICI, Federico
COLLANTES, Genaro Aurelio
CONNOLLY, Alfredo Jorge
CONTE, Augusto
CONTRERAS GÓMEZ, Carlos A.
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
COSTANTINI, Primo Antonio
CURATOLO, Atilio Arnold
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DE LA VEGA de MALVASIO, Lily M. D.
ELFINO, Jorge Raúl
DE NICHILO, Cayetano
DEL RIO, Eduardo Alfredo
DÍAZ de AGÜERO, Dolores
DI CIO, Héctor
DIGON, Roberto Secundino
DOMÍNGUEZ FERREYRA, Dardo N.
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DRUETTA, Raúl Augusto
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco C.
ESPINOZA, Nemecio Carlos
FAPPIANO, Oscar Luján
FERRÉ, Carlos Eduardo
FINO, Torcuato Enrique
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCIA, Carlos Euclides

GARCIA, Roberto Juan
GARGIULO, Lindolfo Maurício
GAY, Armando Luis
GAZIANO, Rubén Alberto
GERARDOZZI, Mario Alberto
GIACOSA, Luis Rodolfo
GIMÉNEZ, Jacinto
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GINZO, Julio José Oscar
GOLFE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZÁLEZ, Alcega Ignacio
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GOROSTEGUI, José Ignacio
GRIMAU, Arturo Anibal
GROSSO, Carlos Alfredo
GUATTI, Emilio Roberto
GUELAR, Diego Ramiro
GUZMAN, Horacio
GUZMAN, María Cristina
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IGLESIAS, Herminio
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
IRIGOYEN, Roberto Osvaldo
JANE, Miguel
JAROSLAVSKY, César
JIMÉNEZ PÉREZ, Antonio
LAMBERTO, Oscar Santiago
LAZCOZ, Hernaldo Efraín
LEMA MACHADO, Jorge
LENCINA, Luis Ascensión
LEPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LESTELLE, Eugenio Alberto
LÓPEZ, Santiago Marcelino
LOSADA, Mario Anibal
MACAYA, Luis María
MACEDO de GÓMEZ, Blanca A.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARTÍNEZ, Luis Alberto

MARTÍNEZ MARQUEZ, Miguel J.
MARINI, Norberto Enrique
MASINI, Héctor
MASSACCESI, Horacio
MASSEI, Oscar Ermelindo
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MELON, Alberto Santos
MILANO, Raúl Mario
MONSERRAT, Miguel Pedro
MOREAU, Leopoldo Raúl
MOREYRA, Omar Demetrio
MOTHE, Félix Justiniano
MULQUI, Hugo Gustavo
NATALE, Alberto A.
NEGRI, Arturo Jesús
SILVA, Próspero
ORTIZ, Pedro Carlos
PAPAGNO, Rogelio
PARENTE, Rodolfo Miguel
PATINO, Artemio Agustín
PELLIN, Osvaldo Francisco
PERA OCAMPO, Tomás Carlos
PÉREZ, René
PERL, Néstor
PIERRI, Alberto Reinaldo
PIUCILL, Hugo Diógenes
PRONE, Alberto Josué
PUEBLA, Ariel
PUGLIESE, Juan Carlos
PUPILLO, Liborio
PURITA, Domingo
RAMOS, Daniel Omar
RAPACINI, Rubén Abel
RATKOVIC, Milivoj
REALI, Raúl
REYNOSO, Adolfo
REZQUIN, Rodolfo Antonio
RIGATUSO, Tránsito
RODRIGO, Juan
RODRIGUEZ, Jesús
RODRIGUEZ ARRIGUI, José Luis
ROJAS, Ricardo
ROMANO NORRI, Julio César A.

SALTO, Roberto Juan
SANCHEZ TORANZO, Nicasio
SARQUIS, Guillermo Carlos
SERRALTA, Miguel Jorge
SILVA, Carlos Oscar
SILVA, Roberto Pascual
SOCCHI, Hugo Alberto
SOLARI BALLESTEROS, Alejandro
SORIA ARCHI, José María
SPINA, Carlos Guido
SRUR, Miguel Antonio
STAVALE, Juan Carlos
STOLKINER, Jorge
STORANI, Conrado Hugo
STUBBIN, Marcelo
SUÁREZ, Lionel Armando
TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
TERRILE, Ricardo Alejandro
TOMA, Miguel Ángel
TORRES, Manuel
TORRESAGASTI, Adolfo
TRIACA, Alberto Jorge
ULLOA, Roberto Augusto
USIN, Domingo Segundo
VAJRETTI, Cristóbal Carlos
VANOLI, Enrique Néstor
VIDAL, Carlos Alfredo
YUNES, Jorge Omar
ZAFFORE, Carlos Alberto
ZAVALEY, Jorge Hernán
ZINGALE, Felipe
ZOCCOLA, Elcio Pablo
ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTE, EN MISIÓN OFICIAL:

INGARAMO, Emilio Felipe

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALTAMIRANO, Antonio Héctor H.¹
ARAMBURU, José Pedro¹
BAGLINI, José
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus¹
CASTIELLA, Juan Carlos¹

CAVALLARO, Antonio Gino¹
DE LA SOTA, José Manuel¹
DÍAZ, Manuel Alberto¹
ENDEIZA, Eduardo A.¹
FALCIONI de BRAVO, Ivelisse I.¹
FLORES, Aníbal Eulogio¹
GONZÁLEZ, Joaquín Vicente¹
IBÁÑEZ, Diego Sebastián¹
LUGONES, Horacio Emerico
LLORENS, Roberto¹
MIRANDA, Julio Antonio¹
PEDRINI, Adam¹
PEPE, Lorenzo Antonio¹
RABANAQUE, Raúl Octavio¹
RAUBER, Cleto
RIQUEZ, Félix
RIUTORT de FLORES, Olga E.¹
SAMMARTINO, Roberto Edmundo¹
VACA, Eduardo Pedro
VANOSI, Jorge Reinaldo¹

AUSENTES, CON AVISO:

ALBERTI, Lucía Teresa N.
ALBORNOZ, Antonio
BLANCO, José Celestino
CÁCERES, Luis Alberto
CAVALLARI, Juan José
DIMASI, Julio Leonardo
GOTTI, Erasmo Alfredo
LIZURUME, José Luis
PELÁEZ, Anselmo Vicente
PEREYRA, Pedro Armando
PÉREZ VIDAL, Alfredo
POSSE, Osvaldo Hugo
RODRÍGUEZ, José
SABADINI, José Luis
SELLA, Orlando Enrique
STORANI, Federico Teobaldo
TORRES, Carlos Martín

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 7883.)
2. Fallecimiento del señor diputado don Angel Horacio Ruiz. (Pág. 7883.)
3. Renuncia a su banca del señor diputado por el distrito electoral de Buenos Aires don Ernesto Juan Figueras. Se acepta. (Pág. 7884.)
4. Renuncia a su banca del señor diputado por el distrito electoral de Santa Fe don Adolfo Luis Stubrin. Se acepta. (Pág. 7884.)
5. Juramento e incorporación de los señores diputados electos por los distritos electorales de Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, don Jorge Carmona, don Jorge Raúl Delfino y don Miguel Jane, respectivamente. (Pág. 7884.)
6. Diario de Sesiones. (Pág. 7885.)
7. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado don Alfredo de la Cruz por motivo de expresiones vertidas

durante un programa radial por el señor diputado Jaroslavsky (3.502-D-86). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 7886.)

8. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo. (Pág. 7886.)
9. Licencias para faltar a sesiones de la Honorable Cámara. (Pág. 7887.)
10. Homenajes:
 - I. A la memoria del ex diputado nacional don Angel Horacio Ruiz. (Pág. 7887.)
 - II. A la memoria del ex diputado nacional doctor Plácido Enrique Nosiglia. (Pág. 7888.)
 - III. A la memoria del doctor Carlos Alberto Alvarado. (Pág. 7890.)
 - IV. Manifestación del señor diputado Stubrin acerca de una solicitud de realización de sesión especial en homenaje a la memoria del ex intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, doctor Julio César Saguier. (Pág. 7891.)

11. Plan de labor de la Honorable Cámara. (Pág. 7892.)
12. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de sobre tablas:

I. Moción del señor diputado Natale de preferencia para el tratamiento del mensaje 2.245 del Poder Ejecutivo, por el cual remite el decreto 2.196, que declara el estado de emergencia del sistema nacional de previsión instituido por las leyes 18.037 y 18.038 (64-P.E.-86) y de diversas iniciativas de la que es autor relacionadas con el régimen previsional (3.296 a 3.301-D.-86.) Es rechazada. (Página 7892.)

II. Moción del señor diputado Zaffore de que se trate sobre tablas su proyecto de resolución por el que se solicitan informes verbales al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto sobre nuevos hechos posesorios producidos por Gran Bretaña en las islas Malvinas y su vinculación con los acuerdos de pesca suscritos por la República Argentina con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Bulgaria (3.428-D.-86). Es rechazada (Página 7893.)

III. Pedido del señor diputado Fino de pronto despacho del proyecto de resolución del señor diputado Giménez (R. F.) y otros por el que se solicitan informes verbales al señor secretario de Cultura acerca de cuestiones relacionadas con la suspensión del programa "Hacia el futuro", emitido por LT 88 TV Canal 11 de Formosa (3.466-D.-86). Se aprueba. (Pág. 7894.)

IV. Moción del señor diputado Fino de que se dé entrada al proyecto de resolución del que es coautor sobre participación de las distintas expresiones políticas en la conducción de los canales de televisión números 7, 11 y 13 de la Capital Federal (3.484-D.-86), y pedido de pronto despacho del mencionado proyecto. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 7895.)

V. Mociones del señor diputado Vidal de que se autorice la sustitución del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se proroga la vigencia de la disposición de facto 22.947 y sus modificaciones —impuesto sobre los débitos en cuenta corriente de entidades financieras— (52-P.E.-86) y de que se traten sobre tablas el dictamen sustitutivo y el producido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se proroga la vigencia de los gravámenes establecidos por la disposición de facto 22.916 y sus modificaciones —impuesto sobre intereses y ajustes en depósitos a plazo fijo— (67-P.E.-86). Se aprueban. (Pág. 7896.)

VI. Moción del señor diputado Bordón González de que se trate sobre tablas el proyecto de

resolución del señor diputado Dalmau y otros por el que se solicitan informes verbales al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto sobre la situación planteada por la creación de una zona económica exclusiva alrededor de las islas Malvinas (3.481-D.-86). Es rechazada. (Pág. 7897.)

VII. Moción del señor diputado Giménez (R. F.) de que se dé entrada a su proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la adopción de diversas medidas en auxilio de las áreas de la provincia de Formosa afectadas por las recientes inundaciones (3.493-D.-86) y pedido de pronto despacho del mencionado proyecto. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 7893.)

VIII. Moción de la señora diputada Alsogaray de preferencia para el proyecto de resolución del señor diputado Alsogaray y otros por el que se solicitan al Poder Ejecutivo informes sobre diversas cuestiones relacionadas con incumplimientos de obligaciones por parte del Banco Central de la República Argentina (3.365-D.-86). Es rechazada. (Pág. 7899.)

IX. Pedido de la señora diputada Alsogaray de pronto despacho del proyecto de resolución del que es coautora por el que se solicitan al Poder Ejecutivo informes sobre diversas cuestiones relacionadas con las regulaciones establecidas unilateralmente por Gran Bretaña en el área Malvinas y sobre los propósitos de la Unión Soviética y Bulgaria en conexión con los acuerdos de pesca firmados con la República Argentina (3.480-D.-86). Se aprueba. (Pág. 7899.)

X. Moción de la señora diputada Alsogaray de preferencia para su proyecto de resolución por el que se solicitan al Poder Ejecutivo informes sobre diversas cuestiones relacionadas con los subsidios a establecimientos educacionales privados (3.479-D.-86). Es rechazada. (Pág. 7899.)

XI. Moción del señor diputado Martínez de que se trate sobre tablas su proyecto de declaración por el que se solicita al Poder Ejecutivo que incluya para su tratamiento en sesiones extraordinarias las modificaciones a la ley 23.492 —de extinción de la acción penal contra los acusados de excesos en la lucha antisubversiva— propuestas en un proyecto de ley del mismo señor diputado (3.477-D.-86). Es rechazada. (Pág. 7900.)

XII. Moción del señor diputado Digón de que se trate sobre tablas el proyecto de resolución del que es coautor por el que se solicitan al Poder Ejecutivo informes sobre la situación jurídica del ciudadano argentino Raúl Gaglianinetti (1.317-D.-86). Es rechazada. (Página 7901.)

XIII. Moción del señor diputado Monserrat de que se dé entrada a dos proyectos relacionados con la ley 23.492, de extinción de la acción penal contra los acusados de excesos en la lucha antisubversiva. Es rechazada. (Página 7901.)

13. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas que, con referencia al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre prórroga de la vigencia de la disposición de facto 22.947 y sus modificaciones —impuesto sobre los débitos en cuenta corriente de entidades financieras— (52-P.E.-86), aconseja restablecer la vigencia de la citada disposición hasta el 31 de diciembre de 1988. Se sanciona. (Página 7902.)

14. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que, con referencia al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre prórroga de la vigencia de los gravámenes establecidos por la disposición de facto 22.916 y sus modificaciones —impuesto sobre intereses y ajustes en depósitos a plazo fijo— (67-P.E.-86), aconseja restablecer la vigencia de la citada disposición hasta el 31 de diciembre de 1988. Se sanciona. (Pág. 7905.)

15. Consideración de los dictámenes de mayoría y minoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se establece un régimen de normalización impositiva de patrimonios en el país y en el exterior, se introducen modificaciones en las leyes de procedimiento tributario y de impuesto de sellos y se dispone el rec padrónamiento de todos los contribuyentes de impuestos nacionales (43-P.E.-86). Se sanciona —con modificaciones— el dictamen de mayoría, aceptándose parcialmente las enmiendas introducidas por el Honorable Senado. (Pág. 7908.)

16. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Municipales y de los Territorios Nacionales y de Transportes en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación del "Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires" (28-P.E.-86). Se sanciona. (Pág. 7931.)

17. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Brizuela (G. R.) y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que incluya en las escalas operativas de la empresa Austral Líneas Aéreas a las ciudades de San Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja, con una frecuencia mínima de tres vuelos semanales (1.270-D.-86). Se sanciona. (Pág. 7939.)

18. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de resolución del señor diputado Curátolo por el que se solicita al Poder Ejecutivo el ensanche de la ruta nacional 9

en el tramo comprendido entre las ciudades de Rosario y Roldán, provincia de Santa Fe (1.428-D.-86). Se sanciona un proyecto de declaración. (Pág. 7940.)

19. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de resolución del señor diputado Azcona y otros sobre cesión a la Municipalidad de San Carlos, provincia de Mendoza, de un terreno de propiedad de la empresa Ferrocarriles Argentinos (2.257-D.-86). Se sanciona un proyecto de declaración. (Pág. 7941.)

20. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Blanco (J. A.) por el que se solicita al Poder Ejecutivo la reparación del tramo de la ruta nacional 5 comprendido entre la localidad de Berutti y la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires (755-D.-86). Se sanciona. (Pág. 7942.)

21. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Bielicki por el que se solicita al Poder Ejecutivo la habilitación de la totalidad de los pasos de control de pasajeros en la estación Once del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento (1.952-D.-86). Se sanciona. (Pág. 7943.)

22. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Brizuela (G. R.) y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo la rehabilitación de los servicios de trenes de carga y pasajeros del Ferrocarril General Belgrano hasta las localidades de Andalgalá y Tinogasta, en la provincia de Catamarca (1.912-D.-86). Se sanciona. (Pág. 7943.)

23. Consideración del dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración de los señores diputados Brizuela (G. R.) y Brizuela (J. A.) por el que se solicita al Poder Ejecutivo se deje sin efecto la remodelación de la red nacional de caminos dispuesta por el decreto 1.595/79 en cuanto se refiere a la ruta 60, tramo Tinogasta-Chaschuil, paso de San Francisco (límite con Chile, km 1.234-1.572,88), transferido a la provincia de Catamarca, de manera que dicho tramo vuelva a integrar la mencionada red nacional (1.829-D.-86). Se sanciona. (Pág. 7945.)

24. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de declaración del señor diputado Parente por el que se solicita al Poder Ejecutivo que se declare monumento histórico nacional a la iglesia San Miguel de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (13-D.-86). Se sanciona. (Pág. 7946.)

25. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley de los señores diputados Gargiulo y Bulacio por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare monumento histórico nacional al Museo de Ciencias Naturales de La

los medios para llamar a un plebiscito en la provincia del Chubut a fin de conocer la opinión de su población en torno a la posible instalación de un basurero nuclear en la localidad de Gastre (3.459-D.-86). (Pág. 8089.)

10. Del señor diputado Serralta: solicitud al Poder Ejecutivo para que adopte medidas de prevención de incendios forestales (3.468-D.-86). (Pág. 8090.)
17. Del señor diputado Serralta: solicitud al Poder Ejecutivo para que instale un aparato telefónico semipúblico en el aeroclub de General Pico, provincia de La Pampa (3.470-D.-86). (Página 8091.)
18. Del señor diputado Altamirano: solicitud al Poder Ejecutivo para que instale una cabina telefónica móvil en la localidad de Copahue, provincia del Neuquén (3.472-D.-86). (Página 8091.)
19. Del señor diputado Ortiz: solicitud al Poder Ejecutivo para que asigne una frecuencia para la instalación de un canal de televisión en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis (3.473-D.-86). (Pág. 8092.)
20. Del señor diputado Blanco (J. A.): solicitud al Poder Ejecutivo para que instale un sistema de radioenlace para el servicio telefónico en la localidad de Carlos María Naón, provincia de Buenos Aires (3.474-D.-86). (Pág. 8092.)
21. Del señor diputado Martínez: inclusión en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias de la modificación al artículo 19 de la ley 23.492, sobre extinción de acciones penales por participación en los delitos a los que se refiere el artículo 10 de la ley 23.049 y en los vinculados a la instauración de formas violentas de acción política, cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983 (3.477-D.-86). (Pág. 8093.)

XII. Licencias. (Pág. 8093.)

C. Asistencia a las comisiones de la Honorable Cámara. (Pág. 8094.)

—En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de febrero de 1987, a la hora 18 y 38, previo pase de lista:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda abierta la sesión con la presencia de 187 señores diputados.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de Corrientes don Nicolás Alfredo Garay a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado don Nicolás Alfredo Garay procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIPUTADO DON ANGEL HORACIO RUIZ

Sr. Presidente (Pugliese). — Tengo el penoso deber de comunicar a la Honorable Cámara el fallecimiento del señor diputado don Angel Horacio Ruiz.

Por Secretaría se dará lectura del decreto de honores dictado por la Presidencia.

Sr. Secretario (Béjar). — Dice así:

Buenos Aires, 19 de enero de 1987.

Visto el fallecimiento ocurrido en el día 13 del corriente del señor diputado de la Nación, Angel Horacio Ruiz, representante del distrito electoral de la provincia de Corrientes, y

CONSIDERANDO:

Que a través de su paso por esta Honorable Cámara, demostró su preocupación permanente por las inquietudes y necesidades de su pueblo, cumpliendo así con las funciones específicas que son inherentes a los señores legisladores, jerarquizando de este modo la imagen de las instituciones democráticas que representan. Por ello,

El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º — Adherir al duelo que provoca el fallecimiento del señor diputado de la Nación Angel Horacio Ruiz.

Art. 2º — Disponer que la Bandera Nacional sea izada a media asta en el Palacio del Congreso, durante el término de tres días en señal de duelo.

Art. 3º — Designar a los señores diputados de la Nación, Carlos H. Bianchi, Carlos A. Contreras Gómez, Nemesio C. Espinoza, Nicolás A. Garay, Tomás W. González Cabañas y Alejandro Solari Ballesteros, todos ellos pertenecientes al distrito electoral de la provincia de Corrientes, para que en representación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se hagan presentes en los actos de despedida e inhumación de los restos del señor diputado desaparecido.

Art. 4º — Enviar ofrenda floral y nota de pésame con transcripción de la presente resolución.

11

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde pasar al término reglamentario destinado a la consideración del plan de labor de la Honorable Cámara.

Por Secretaría se dará lectura de la nómina de asuntos que se hallan en condiciones de ser considerados, advirtiendo la Presidencia que la enunciación no constituye lo que técnicamente se entiende como decisión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. Secretario (Belnicoff). — Dictámenes de mayoría y minoría en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se establece un régimen de normalización impositiva de patrimonios en el país y en el exterior, se introducen modificaciones a las leyes de procedimiento tributario y de impuesto de sellos y se dispone el recampadronamiento de todos los contribuyentes de impuestos nacionales (Orden del Día N° 890, con disidencias y observaciones; expediente 43-P.E.-86).

Dictamen con observaciones recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación del fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos (Orden del Día N° 742, expediente 28-P.E.-86).

Dictámenes recaídos sobre proyectos de resolución o de declaración, contenidos en los órdenes del día sin disidencias ni observaciones y de término vencido números 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 812, 824, 825, 826, 823, 829, 834, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 847, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 869, 870, 874, 875, 876, 877, 878 y 887.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar si la Cámara adopta como plan de labor la consideración de los dictámenes enunciados por Secretaría.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda aprobado el plan de labor.

12

PEDIDOS DE INFORMES O DE PRONTO
DESPACHO, CONSULTAS Y MOCIONES
DE PREFERENCIA O DE SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde pasar al término previsto por el artículo 154 del regla-

mento, destinado a pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de sobre tablas.

I

Moción de preferencia

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: solicito tratamiento preferencial para la sesión del miércoles 11 de febrero, del mensaje 2.245 del Poder Ejecutivo, por el cual remite el decreto 2.196, que declara el estado de emergencia del sistema nacional de previsión instituido por las leyes 18.037 y 18.038 (expediente 64-P.E.-86).

La gravedad de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo, modificando por actos propios leyes de la Nación, implica una seria cuestión cuya consideración no puede ser postergada por parte del Congreso de la Nación.

Hoy mismo tuvo estado público un nuevo acto de naturaleza administrativa que afecta aún más la viabilidad del decreto 2.196. Se trata de la resolución del Tribunal de Cuentas de la Nación dictada días atrás, que se conoció en la fecha, por la cual se resuelve impugnar la citada decisión del Poder Ejecutivo.

En su momento habremos de demostrar las razones que justifican la inconstitucionalidad manifiesta del citado decreto, pero me anticipo a señalar que está habilitada la instancia parlamentaria en virtud de la inclusión por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias del decreto 2.196 por el dictado. Por lo tanto, solicito que, juntamente con su consideración en la sesión especial requerida, se traten los siguientes proyectos que tuvieron entrada el año pasado: proyecto de ley de modificaciones a la ley 18.037 (expediente 3.296-D.-86); modificación de la ley 18.038 (expediente 3.297-D.-86); modificaciones a la ley 23.081 (expediente 3.298-D.-86); proyecto de resolución sobre el régimen previsional especial (expediente 3.299-D.-86); proyecto de ley por el que se dispone el empadronamiento jubilatorio (expediente 3.300-D.-86) y proyecto de ley por el que se establece la emisión de un bono de consolidación del sistema nacional de previsión social (expediente 3.301-D.-86).

Se trata de seis proyectos —cinco de ley y uno de resolución— que presenté en la Honorable Cámara tratando de encontrar una sanción de fondo para el gravísimo problema institucional planteado en el sistema de previsión social argentino.

¿Por qué las provincias deben seguir padeciendo esa asfixia financiera? Se trata de un impuesto de fácil recaudación en todas las entidades financieras en donde existen los conocidos plazos fijos. Allí las provincias podrían verificar y recaudar lo que les corresponde. Por lo tanto, fundamento el voto negativo diciendo que no debemos prorrogar más este tipo de leyes que la Nación aplica para recaudar recursos que son de las provincias, sin devolver lo que a ellas les corresponde.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Señor presidente: voy a formular algunas observaciones con respecto a lo que se ha dicho en este recinto.

En primer lugar, los pedidos de informes sobre el monto de los fondos y la forma de distribución son desconocidos para todos los miembros del cuerpo. De este modo respondo la inquietud del colega que preguntaba cómo había resultado la repartición.

Con respecto a las expresiones del señor diputado Juez Pérez, debo decir que la Nación no se queda con los fondos, porque en definitiva ellos son destinados a las provincias.

Por otro lado, la observación sobre la modificación del destino de los fondos colisionaría con lo que había explicado al inicio de la exposición como miembro informante, en el sentido de que el proyecto del Poder Ejecutivo simplemente habilita para que la Honorable Cámara se pronuncie sobre la vigencia temporal del impuesto, pero no sobre el resto de las disposiciones referidas al impuesto en sí.

En este aspecto, no hay divergencia en el criterio del Poder Ejecutivo con relación a otros proyectos enviados por él. La modificación del destino de los fondos figura en un proyecto de ley que aún se encuentra a consideración de las comisiones de Vivienda y de Finanzas. Pero lo que ocurre es que el impuesto venció el 31 de diciembre de 1986. De manera que en tanto y en cuanto nosotros discutimos, el impuesto no se recauda. De allí la urgencia de restablecer su vigencia, para que la recaudación se efectúe. Queda abierta la posibilidad del tratamiento en el período ordinario de otros proyectos —incluso el del Poder Ejecutivo— que modifican el destino de los fondos.

Creo que el peor remedio que podría adoptar este cuerpo como médico, sería matar al enfermo frente al mal que padece. De lo que aquí se trata es de decidir simplemente sobre la vigencia temporal del impuesto. Posteriormente, y cuando correspondiera, nos dedicaremos al tema vincula-

do al destino de los fondos y a la forma de su percepción y distribución.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: debo decir que entiendo es falsa la opción del remedio y la enfermedad, que ha planteado el señor diputado Baglini, porque eso sucede cuando no existe otro remedio. Pero cuando el médico tiene un remedio menos doloroso y que además cura al enfermo, y sucede que ese médico es el Congreso de la Nación, que tiene en sus manos la posibilidad de introducir reformas que brinden una garantía a las provincias, entonces no estamos colocando piedras en el camino, sino utilizando el natural reaseguro que tiene un legislador respecto de los intereses de su provincia cuando los reclamos de sus funcionarios no tienen eco. Si es que todos estamos en el mismo barco, lo que pretendemos es llegar a puerto, pero con los pasajeros vivos.

Sr. Presidente (Silva). — Se va a votar el artículo único del proyecto de ley.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente (Silva). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

15

NORMALIZACION IMPOSITIVA DE PATRIMONIOS (Orden del Día Nº 890)

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el cual se establece un régimen de normalización impositiva de patrimonios en el país y en el extranjero, introduciendo modificaciones en las leyes de procedimiento tributario y en la del impuesto de sellos, y se dispone el reempadronamiento de todos los contribuyentes de impuestos nacionales; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la aceptación total de las modificaciones a los artículos 4º, 8º, 11, 28, 31, 32, 37, 48 y 50; la aceptación parcial de las modificaciones de los artículos 29, 36 y 54, y desechar las correspondientes a los artículos 2º, 41, 42, 44, 53, 56 y el agregado del capítulo V.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 8000.)

1. Aceptación total

Artículo 4º (punto 2 de la sanción del Honorable Senado).

Artículo 8º (punto 3 de la sanción del Honorable Senado).

Artículo 11 (punto 4 de la sanción del Honorable Senado).

Artículo 28 (punto 5 de la sanción del Honorable Senado).

Artículo 31 (punto 7 de la sanción del Honorable Senado), se suprime.

Artículo 32 (punto 8 de la sanción del Honorable Senado), pasa a ser artículo 31.

Artículo 37 (punto 10 de la sanción del Honorable Senado), pasa a ser artículo 36.

Artículo 48 (punto 14 de la sanción del Honorable Senado), pasa a ser artículo 47.

Artículo 50 (punto 15 de la sanción del Honorable Senado), pasa a ser artículo 49.

2. Aceptación parcial

Artículo 29 (punto 6 de la sanción del Honorable Senado): se acepta la modificación del inciso b) y se rechaza la modificación del inciso d).

Artículo 30 (punto 9 de la sanción del Honorable Senado), que pasa a ser artículo 35:

—En el primer párrafo sanción de Diputados, donde dice "...30 de junio..." debe decir "...31 de agosto..."

—En el inciso a) sanción de Diputados, donde dice "...hasta la fecha indicada", debe decir "...hasta el 30 de septiembre de 1986, inclusive".

—En el inciso d) sanción Diputados, donde dice "...al 30 de junio...", debe decir "... al 30 de septiembre..."

—En el penúltimo párrafo sanción de Diputados, donde dice "...30 de junio...", debe decir "... 30 de septiembre..."

—Se rechazan el resto de las modificaciones propuestas para este artículo.

Artículo 54 (punto 17 de la sanción del Honorable Senado), que pasa a ser artículo 53:

—En el artículo incorporado a continuación del artículo 60 de la ley de impuesto de sellos (texto ordenado en 1986), se rechaza la modificación propuesta por el inciso 1 de la sanción del Honorable Senado.

—En el artículo 62 de la ley de impuesto de sellos (texto ordenado en 1986), se acepta la incorporación del inciso g) propuesta por el Honorable Senado, que dice:

g) Las operaciones comprendidas en el artículo 93 de la ley 11.672.

3. Desechar

Artículo 2º (punto 1 de la sanción del Honorable

Artículo 41 (punto 11 de la sanción del Honorable Senado), que pasa a ser artículo 40.

Artículo 42 (punto 12 de la sanción del Honorable Senado), que pasa a ser artículo 41.

Artículo 44 (punto 13 de la sanción del Honorable Senado), que pasa a ser artículo 43.

Artículo 53 (punto 16 de la sanción del Honorable Senado), que pasa a ser artículo 52.

Artículo 56 (punto 18 de la sanción del Honorable Senado), que pasa a ser artículo 55.

Capítulo V (punto 19 de la sanción del Honorable Senado), que se agregó.

4. Adecuación de remisiones

Artículo 16, primer párrafo, donde dice "artículo 43", debe decir "artículo 42".

Artículo 28, inciso c) pasa ser inciso b) e inciso d) pasa a ser inciso c).

Artículo 38, primer y segundo párrafo, donde dice "artículo 36", debe decir "artículo 35"; y en el segundo párrafo donde dice "artículo 37", debe decir "artículo 36".

Artículo 39, primer párrafo, donde dice "artículo 36", debe decir "artículo 35".

Artículo 47, donde dice "artículos 41 y 42", debe decir "artículos 40 y 41", respectivamente.

Artículo 56, puntos 1 y 2, donde dice "artículo 53", debe decir "artículo 52".

Con la supresión del artículo 31, el artículo 32 pasa a ser artículo 31, y así sucesivamente hasta el artículo 56, que pasa a ser artículo 55.

Sala de la comisión, 21 de enero de 1987.

Jesús Rodríguez. — Ariel Puebla. — Antonio Albornoz. — Pedro J. Capuano. — Lorenzo J. Cortese. — José A. Furque. — Néstor L. Golpe Montiel. — Santiago M. López. — Marcelo Stubrin. — Carlos A. Vidal.

En disidencia total:

Alvaro C. Alsogaray. — Miguel P. Monserrat.

INFORME

Honorable Cámara:

Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda ha efectuado el análisis del proyecto de ley en revisión a través del cual se establece un régimen de normalización tributaria y en el que se contemplaron distintos aspectos de los temas en análisis.

Se incorporaron adecuaciones en la redacción y algunos perfeccionamientos de técnica legislativa que fueron establecidos en las modificaciones que introdujo la Honorable Cámara de Senadores en el proyecto que tuviera sanción en esta Cámara.

En este contexto se tuvieron en cuenta las variables relevantes, entre las que se pueden mencionar: la reducción de tasas, la adecuación de las escalas en cuanto a la definición de los tramos y a las tasas marginales

y el tratamiento de las sociedades de personas a las que se les aplica una escala progresiva. Se posibilitará de esta forma que se incorpore una mayor cantidad de contribuyentes al régimen de normalización.

También se consideró favorablemente la ampliación de las fechas límites para que las obligaciones tributarias queden comprendidas en el régimen de condonación de sanciones, de manera que se adecuen a la nueva fecha de vigencia de la ley.

Fue aceptada la propuesta del Honorable Senado sobre la coparticipación de los ingresos resultantes de la normalización, contribuyendo así a una mejora en la relación financiera entre la Nación y las provincias.

Por otra parte, con relación a la inversión inducida que fuera planteada en el capítulo V, agregado por el Honorable Senado, se desestima la incorporación de este capítulo en la normalización tributaria, ya que su inclusión no responde a los objetivos del proyecto y tampoco reúne los requisitos de generalidad que caracteriza a todo el régimen de normalización.

En cuanto a las modificaciones introducidas por el Honorable Senado sobre la ley 11.683 (de procedimientos tributarios), es de destacar que no se acepta la modificación del artículo 102, por cuanto esta norma tiene por objeto inducir a los contribuyentes a declarar correctamente sus bienes registrables y a la determinación y pago de los impuestos correspondientes.

Por las razones expuestas se solicita a la Honorable Cámara la sanción de este proyecto de ley.

Jesús Rodríguez.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el cual se establece un régimen de normalización impositiva de patrimonios en el país y en el extranjero, introduciendo modificaciones en las leyes de procedimiento de todos los contribuyentes de impuestos nacionales, y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, excepto las modificaciones de los artículos: punto 7 (artículo 31), apartado 4 del punto 16 y el punto 18:

1. Se rechaza el punto 7 (artículo 31) de la sanción del Senado manteniendo el artículo 31 del proyecto en su texto original.

2. Se rechaza el apartado 4 del punto 16 de la sanción del Honorable Senado de la Nación manteniendo el punto 6 del artículo 53 de la sanción de esta Cámara, dejando así vigente el texto propuesto para el artículo 102 de la ley 11.683.

3. Se rechaza el punto 18 de la sanción del Honorable Senado de la Nación manteniendo la vigencia del

artículo 56 del texto aprobado por esta Cámara en correspondencia con el punto anterior.

Sala de la comisión, 21 de enero de 1987.

Alberto C. Bonino. — Diego R. Gucler. —
Oscar S. Lamberto. — Jorge R. Matzkin.
— Héctor M. Mayra. — Raúl Reali.

INFORME

Honorable Cámara:

La sanción del Honorable Senado recoge en su casi totalidad las aspiraciones de este bloque, las que sumadas a las razones que dará el miembro informante nos llevan a aceptar íntegramente las modificaciones introducidas por el Honorable Senado de la Nación con las siguientes tres excepciones en relación a las cuales se insiste en la sanción original de la Cámara.

Jorge R. Matzkin.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 30 de octubre de 1986.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen de normalización impositiva, y ha tenido a bien aprobarlo, con las siguientes modificaciones:

1. En el artículo 2º, agregar al final la expresión: "salvo respecto de las situaciones contempladas en el artículo 48".

2. Modificar el inciso a) del artículo 4º agregando al final del segundo párrafo la expresión "y se pruebe su inversión o destino".

3. Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Artículo 8º — Para el cálculo del impuesto especial de normalización deberá aplicarse a la base imponible las alícuotas que para cada caso se fijan a continuación:

a) Personas físicas, sucesiones indivisas y sociedades comprendidas en el tercer párrafo del artículo 1º de la ley.

0	20.000	—	2 %	—
20.000	60.000	400	4 %	20.000
60.000	160.000	2.000	6 %	60.000
160.000	400.000	8.000	8 %	160.000
400.000	—	27.200	10 %	400.000

b) Para los demás obligados: diez por ciento (10 %).

4. Sustitúyese el artículo 11 por el siguiente:

Artículo 11. — Para que la normalización a que se refiere este capítulo tenga validez, deberán presentarse las declaraciones juradas y efectuarse el pago del impuesto en el tiempo y forma que establezca la Dirección General Impositiva, la que queda facultada para disponer planes de facilidades de pago en cuotas actualizables, con un interés que no podrá exceder el establecido para deudas actualizadas, y para disponer pagos a cuenta o anticipos del impuesto especial que en definitiva resulte.

Una vez vencido el plazo que establezca dicho organismo para la presentación de las respectivas declaraciones juradas, éstas tendrán carácter definitivo para el contribuyente y sólo podrán ser modificadas por errores de cálculo cometidos en los mismos formularios.

5. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:

Artículo 28. — Quedan excluidos de la presente normalización:

- Los impuestos previstos en los artículos 23 y 23 bis —incorporados por la ley 23.002— de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones;
- El monto del impuesto resultante de declaraciones juradas presentadas por los responsables o contribuyentes con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial;
- El impuesto resultante de las determinaciones efectuadas por la Dirección General Impositiva que se encuentren firmes a la fecha indicada en el inciso anterior.

No se considerarán comprendidas en este punto las intimaciones de pago realizadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones. A los fines previstos en este inciso, será de aplicación lo establecido por los párrafos segundo y tercero del punto 2 del inciso b) del artículo 39 del capítulo I.

6. Modifícanse en el artículo 29 los siguientes incisos:

- (último párrafo). Los importes así establecidos para los períodos fiscales comprendidos en cada año calendario se sumarán sin actualizar.
- El importe actualizado que resulte para cada período fiscal o año calendario, se reducirá en los porcentajes que para cada caso se fijan a continuación:

Impuesto al Valor Agregado	
Período fiscal	Porcentaje de reducción
1984 y anteriores	75
1985 Ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	75
1985 Ejercicios cerrados a partir del mes de junio, inclusive	55

Impuestos internos

Año calendario	Porcentaje de reducción %
1984 y anteriores	75
1985	55

7. El artículo 31 se suprime.

8. Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

Artículo 32. — Para que la normalización a que se refiere el presente capítulo tenga validez, deberán presentarse las declaraciones juradas y efectuarse el pago del impuesto en el tiempo y forma que establezca la Dirección General Impositiva, la que queda facultada para disponer planes de facilidades de pago en cuotas actualizables, con un interés que no podrá exceder el establecido para deudas actualizadas, y para disponer pagos a cuenta o anticipos del impuesto especial que en definitiva resulte.

Una vez vencido el plazo que establezca dicho organismo para la presentación de las respectivas declaraciones juradas, éstas tendrán carácter definitivo y sólo podrán ser modificadas por errores de cálculo cometidos en los mismos formularios.

9. En el capítulo III sustitúyese el artículo 38 por el siguiente:

Artículo 38. — Los contribuyentes y responsables de los tributos comprendidos en los capítulos I y II, excepto los mencionados en el inciso a) del artículo 28, podrán de acuerdo con lo dispuesto por el presente capítulo, regularizar las obligaciones cuyos vencimientos se hubieren operado hasta el día 31 de agosto de 1986, inclusive, en relación a los aludidos gravámenes que surjan de:

- Declaraciones juradas presentadas o determinaciones de oficio que hubieren quedado firmes hasta el 30 de septiembre de 1986, inclusive;
- Anticipos, posiciones mensuales y pagos a cuenta;
- Retenciones o percepciones no practicadas;
- Multas firmes al 30 de septiembre de 1986, inclusive;
- Actualizaciones correspondientes a los conceptos mencionados en los incisos anteriores, excepto sobre los citados en el inciso b) que quedan liberados;
- Actualizaciones correspondientes al concepto mencionado en el inciso anterior.

El presente régimen comprende también las obligaciones, exteriorizadas o no, por actos o hechos imponible formalizados hasta el día 30 de septiembre de 1986, inclusive, correspondientes al impuesto de sellos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Dirección General Impositiva, aun cuando no se requiera para su determinación la presentación de declaraciones juradas, incluidas las multas que hubieran quedado firmes a esa fecha.

Quedan incluidas en el presente régimen las obligaciones provenientes de regímenes de facilidades de pago, hubieran o no caducado los correspondientes beneficios. El importe actualizado, que resulte para cada período fiscal o año calendario una vez aplicadas las disposiciones del decreto 1.096/85 cuando correspondiere, se reducirá en los porcentajes que para cada caso se fijan a continuación:

Período fiscal	Porcentaje de reducción
1984 y anteriores	15
1985 ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	15
1985 ejercicios cerrados a partir del mes de junio, inclusive	10
1986 ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	5

10. En el artículo 37 donde dice 30/6/86 llevar al 30/9/86.

11. Agregar en el artículo 41 lo siguiente como segundo párrafo:

El importe actualizado, que resulte para cada período fiscal o año calendario una vez aplicadas las disposiciones del decreto 1.096/85 cuando correspondiere, se reducirá en los porcentajes que para cada caso se fijan a continuación:

Período fiscal	Porcentaje de reducción
1984 y anteriores	15
1985 ejercicios cerrados hasta el mes de mayo, inclusive	15
1985 ejercicios cerrados a partir del mes de junio, inclusive	10

Sobre los saldos de impuesto que se determinen no procederá la aplicación de los intereses y sanciones previstos en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

12. Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

Artículo 42. — Los contribuyentes y responsables podrán presentar las declaraciones juradas omitidas o, en su caso, rectificar las que hubieran presentado, por los impuestos indicados en los artículos 29, 27 y 41, correspondientes a los períodos fiscales posteriores a los comprendidos en la normalización dispuesta por los capítulos I y II, a fin de quedar liberados en relación con las diferencias de impuestos no ingresadas de:

a) Los intereses y multas que pudieran corresponder, cuando el vencimiento para la presentación de la respectiva declaración jurada hubiera operado hasta el 31 de agosto de 1986, inclusive;

b) Las multas que pudieren corresponder, cuando el vencimiento hubiera operado a partir del 1º de julio de 1986 y hasta la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial.

Esta liberación sólo alcanza a las presentaciones de declaraciones juradas originales o rectificativas, e ingresos que se efectúen hasta la fecha de vencimiento que a tales fines disponga la Dirección General Impositiva. A las precitadas declaraciones no les será de aplicación lo establecido en los incisos b) y c) del artículo 16.

También quedan comprendidos en las disposiciones de este artículo, los contribuyentes y responsables que no habiéndose acogido a las disposiciones de los capítulos I y II y del artículo 41, cumplan con lo establecido en el párrafo anterior.

Las obligaciones tributarias que surjan en virtud de lo dispuesto en los artículos 41 y el presente, podrán ser canceladas mediante los planes de facilidades de pago previstos en los artículos 11 y 32 de la presente ley.

13. — Sustitúyese el artículo 44 por el siguiente:

Artículo 44. — No corresponderá efectuar ajuste alguno a los importes de los anticipos de los impuestos a las ganancias, sobre los capitales y sobre el patrimonio neto, que hubieran sido determinados sobre la base de declaraciones juradas presentadas con anterioridad a la fecha de vencimiento que se fije para la presentación de las declaraciones juradas de normalización y regularización previstas en los capítulos I, II, III y IV.

Asimismo, quedan condonados los intereses y actualizaciones no ingresados correspondientes a los anticipos de los mencionados impuestos que hubieren vencido hasta la fecha de publicación de esta ley en el Boletín Oficial. Esta condonación no alcanza a la parte proporcional del anticipo que correspondiere a ajustes de declaraciones juradas que realice la Dirección General Impositiva después de vencidos los plazos de normalización y regularización.

Igual tratamiento y con los mismos efectos se dispensará a los intereses y actualizaciones no ingresados correspondientes a:

1. Posiciones mensuales y anticipos del impuesto al valor agregado vencidos hasta el 31 de octubre de 1986.
2. Impuestos internos: por períodos fiscales vencidos hasta el 31 de octubre de 1986.

Lo dispuesto precedentemente será de aplicación para todos los contribuyentes, estuvieren o no comprendidos en las disposiciones de los capítulos I, II y III de la presente ley.

14. Sustituir el artículo 48 por el siguiente:

Artículo 48. — Quedan excluidos de la normalización los incrementos patrimoniales obtenidos por parte de los funcionarios públicos nacionales, pro-

vinciales y municipales, de los tres poderes, a partir de la categoría de director nacional o equivalente hasta la de presidente de la República, inclusive, que se hubieran desempeñado a partir del 25 de marzo de 1976 y hasta el 31 de diciembre de 1985, ambas fechas inclusive, incluidos aquellos que hubieran prestado servicios en un período parcial de tiempo comprendido entre las fechas mencionadas. Asimismo quedan excluidos de igual forma quienes se hubieran desempeñado como directores, administradores o en funciones equivalentes de las empresas del Estado.

15. Sustitúyese el artículo 50 por el siguiente:

Artículo 50. — El producido del impuesto especial de normalización que se establece en los capítulos I y II se destinará:

- a) El tres por ciento (3 %) de la Dirección General Impositiva para ser aplicado al desarrollo de su infraestructura y a la modernización de su capacidad operativa, por sobre los niveles que fije con carácter general el Poder Ejecutivo para la administración pública nacional en el ejercicio 1987;
- b) El noventa y siete por ciento (97 %) restante se distribuirá entre la Nación y las provincias adheridas al régimen de coparticipación federal de impuestos en la forma y proporciones que el mismo establezca para cada una de ellas.

Hasta tanto entre en vigencia el régimen mencionado en el párrafo precedente, el monto establecido en este inciso se asignará de la siguiente forma:

1. El cincuenta por ciento (50 %) será atribuido a la Nación.
2. El cincuenta por ciento (50 %) se atribuirá a las provincias en forma directamente proporcional a los importes que se le asignen a cada una de ellas en el régimen vigente cada año para la distribución transitoria de recursos federales a las provincias.

La distribución de los fondos se hará en forma automática en la medida de su percepción.

Los importes correspondientes al gobierno nacional serán destinados a la creación de un fondo para el mejoramiento de la infraestructura social.

16. Al artículo 53 efectuar las siguientes modificaciones:

1. En el punto 1. artículo 3º, que se sustituye, reemplazar el último párrafo por el siguiente:

La fiscalización de la ejecución del presupuesto administrativo de la Dirección General Impositiva por parte del tribunal de cuentas, se realizará con posterioridad a los actos respectivos, mediante estados mensuales y su documentación probatoria, sin perjuicio de las

facultades que le otorga la ley de contabilidad a la Contaduría General de la Nación.

2. Sustituir el inciso i) del punto 4 por el siguiente:

i) Administrar el presupuesto, autorizando y aprobando los gastos e inversiones del organismo. Podrá redistribuir los créditos a nivel de incisos, partida principal, parcial y proyectos del plan analítico de trabajos públicos, sin alterar el monto total asignado, en la medida en que el Poder Ejecutivo esté facultado para ello;

3. Se incorpora al final del inciso j) después del punto seguido lo siguiente: "Queda exceptuada de esta facultad la venta de inmuebles".

4. Se suprime el punto 6.

5. En el antepenúltimo párrafo se suprime la expresión "y manejo".

17. Introducir las siguientes modificaciones en el artículo 54:

1. En el punto 3 donde dice "sesenta por mil (60‰)" debe decir "treinta por mil" (30‰).
2. En el punto 6 agregar como inciso g) el siguiente:

g) Las operaciones comprendidas en el artículo 93 de la ley 11.672.

18. Sustitúyese el artículo 56 por el siguiente:

Art. 56. — La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, excepto para las sustituciones de los artículos 3º, 5º y 6º y 114 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, dispuesta por los puntos 1, 2, 4 y 7 del artículo 53, que serán aplicables a partir del ejercicio presupuestario 1987.

19. Incorpórase como nuevo capítulo, a continuación del capítulo IV del título I, el siguiente:

CAPÍTULO V

Exteriorización de capitales con destino a la reactivación del aparato productivo nacional

Artículo ... — Los sujetos y responsables comprendidos en el capítulo I, que normalicen su situación tributaria conforme al régimen establecido en el mismo, exteriorizando capitales —en moneda extranjera o australes— que destinen a inversiones que tengan como finalidad la reactivación del aparato productivo nacional, podrán acogerse a las disposiciones del presente capítulo.

Artículo ... — Los fondos exteriorizados solamente podrán disponerse para alguno de los siguientes destinos:

- a) Adquisición de unidades automotores nuevas destinadas al transporte de carga general o al de pasajeros, excluidos los automóviles;

- b) Construcción o compra de unidades nuevas de vivienda común o económica de acuerdo a las disposiciones de la resolución 368/76 del 13 de octubre de 1976, de la entonces Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo;
- c) Adquisición de bienes de uso nuevos de origen nacional excluidos los automóviles;
- d) Importación o adquisición de bienes de uso nuevos de origen extranjero que no se fabriquen en el país y que sean debidamente autorizados por la autoridad competente;
- e) Suscripción e integración de acciones de sociedades cuyos títulos coticen en bolsa, las que deberán aplicar estos fondos a los fines previstos en los restantes incisos de este artículo;
- f) Suscripción de títulos, cédulas u otros certificados equivalentes emitidos o que emita el Banco Hipotecario Nacional;
- g) Construcción de hoteles o complejos turísticos;
- h) Construcción de edificios y galpones, incluyendo sus instalaciones, destinados a ser afectados como bienes de uso de la empresa.

Artículo ... — El importe de las disponibilidades deberá depositarse en las entidades financieras que a esos efectos determine el Banco Central de la República Argentina antes de la fecha de vencimiento que se fije para la presentación de las declaraciones juradas de normalización, en las condiciones que disponga la citada entidad rectora.

Artículo ... — Los depósitos deberán efectuarse en australes (A) o en dólares estadounidenses (u\$s) y devengarán un interés pagadero al momento del retiro total de los fondos. La tasa del mencionado interés será fijada por el Banco Central de la República Argentina, no pudiendo ser inferior:

- a) Para depósitos en moneda nacional: la tasa de interés pasiva no regulada que aplique el Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a treinta (30) días.
- b) Para depósitos en dólares estadounidenses: una tasa equivalente a la tasa Labor a treinta (30) días para dólares estadounidenses.

Artículo ... — El total de los importes depositados, incluido los intereses que éstos devenguen deberá aplicarse a los destinos previstos en el presente capítulo en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses, debiendo tener la inversión principio de ejecución dentro de los seis (6) meses, ambos plazos contados desde la fecha de imposición del respectivo depósito.

Estos plazos podrán ser ampliados por la Dirección General Impositiva a solicitud del responsable en los casos debidamente justificados.

Artículo ... — La liberación prevista de los fondos depositados se hará en todos los casos en australes (A). A tal efecto, para el caso de los depósitos en moneda extranjera el Banco Central de la República Argentina deberá efectuar las operaciones

de compra utilizando para la conversión el tipo de cambio que se fije para el denominado dólar-turista o dólar-pasaje o el equivalente que lo sustituya en el último día hábil anterior a la fecha de la liberación de los mencionados depósitos.

Artículo ... — El retiro total o parcial de los fondos sólo podrá efectuarse previa autorización de la Dirección General Impositiva, a cuyo efecto los contribuyentes comprendidos en este capítulo deberán solicitar a dicho organismo la liberación de los fondos explicitando el destino que se dará a los mismos en la forma y condiciones que dicho organismo determine.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los responsables comprendidos deberán aportar a la Dirección General Impositiva, dentro del plazo que establezca, la documentación que pruebe la inversión realizada.

Artículo ... — En el caso que la inversión no tuviere principio de ejecución dentro del plazo previsto o las sumas depositadas no se hubieren —total o parcialmente— invertido en las condiciones fijadas en el presente régimen, se producirá el decaimiento del beneficio en la proporción que represente el remanente no utilizado.

Producido el decaimiento —total o parcial— de los beneficios acordados en este capítulo, el importe correspondiente a la reducción del impuesto especial indebidamente computado deberá ingresarse con más las actualizaciones e intereses previstos en la ley 11.683, texto ordenado en 1978, y sus modificaciones.

Artículo ... — Los sujetos que se acojan al presente capítulo gozarán de una rebaja equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del incremento de la obligación tributaria motivada por la incorporación de los capitales previstos en este capítulo.

Artículo ... — Lo establecido en el presente capítulo deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro de los sesenta (60) días de la promulgación de esta ley, quedando asimismo facultado para dictar las normas complementarias que liagan al cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo.

20. Se adecuarán las referencias, capítulos, citas y numeración de artículos a las modificaciones propuestas. Saludo a usted muy atentamente.

VÍCTOR H. MARTÍNEZ.
Antonio J. Macris.

OBSERVACIONES

1

Buenos Aires, 2 de febrero de 1987.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
doctor Juan Carlos Pugliese.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de formular observación al dictamen de la Comisión

S/D.

de Presupuesto y Hacienda contenido en el Orden del Día N° 890 referido a Normalización Impositiva de Patrimonios.

En tal sentido vengo a efectuar la oposición que establece el reglamento de esta Honorable Cámara, por las razones expuestas en la oportunidad de la consideración por la Honorable Cámara del Orden del Día N° 741, los días 22 y 23 de octubre de 1986, Diario de Sesiones, páginas 6593/6595 y 6903/6907 y las que además expondremos en oportunidad del tratamiento de esta Orden del Día N° 890.

Saludo al señor presidente muy atentamente.

Norberto L. Copello.

2

Buenos Aires, 3 de febrero de 1987.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Dr. Juan Carlos Pugliese

S/D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin de formular observación, conforme con lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento de la Cámara, al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, contenido en el Orden del Día N° 890.

Esta observación se fundamenta en el carácter puramente fiscalista del proyecto de normalización impositiva de patrimonios.

Saludo al señor presidente respetuosamente.

Carlos A. Zaffore.

Sr. Presidente (Silva). — En consideración.

Tiene la palabra el señor miembro informante del dictamen de mayoría.

Sr. Vidal. — Señor presidente: antes de abordar la fundamentación en general del dictamen y en mérito a las características propias del tratamiento de este proyecto, debo informar a la Presidencia que el dictamen de mayoría ha sufrido algunas pequeñas modificaciones con motivo de que la bancada mayoritaria ha acogido algunas de las consideraciones del despacho de minoría.

La primera modificación al dictamen de mayoría impreso es la siguiente. En el punto 1, que trata de la "aceptación total", se suprime la expresión: "Artículo 31 (punto 7 de la sanción del Honorable Senado), se suprime."; y en el punto 3, que trata acerca de las enmiendas que se desechan, entre la mención de los artículos 29 y 41 constará el siguiente agregado: "Artículo 31 (punto 7 de la sanción del Honorable Senado)", es decir que se desecha la supresión del artículo 31.

En el resto del precitado punto 3 del dictamen de mayoría hay toda una serie de citas:

"Artículo 42..., que pasa a ser artículo 41."; "Artículo 44..., que pasa a ser artículo 43."; "Artículo 53..., que pasa a ser artículo 52."; y "Artículo 56..., que pasa a ser artículo 55.". Todas estas concordancias quedan anuladas ya que al no aceptarse la supresión del artículo 31 no se modifica la numeración de los artículos que le siguen. Lo mismo cabe aclarar con respecto a las concordancias indicadas en los puntos 1 y 2 del dictamen respecto de los artículos 32, 36, 37, 48, 50 y 54.

En el punto 4 del dictamen de mayoría, que trata de la adecuación de remisiones, sólo debe subsistir la expresión: "Artículo 28, inciso c) pasa a ser inciso b) e inciso d) pasa a ser inciso c).", debiéndose anular el resto de las menciones que allí constan, pues al igual que en el caso anterior no hay modificación en el ordenamiento del articulado.

Efectuadas estas aclaraciones, paso a fundamentar el dictamen de mayoría.

Como los señores diputados habrán observado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconseja la aceptación total de algunas modificaciones introducidas por el Honorable Senado a la sanción que le fuera pasada en revisión. También propiciamos la aceptación parcial de otras y asimismo proponemos se desechen otras reformas que incorpora la Cámara alta. Existen innumerables modificaciones de carácter técnico, jurídico y formal que la comisión admitió; si algún señor diputado lo desea, este miembro informante puede ahondar en detalles, mas se me ocurre que en principio ello no es necesario. No obstante, considero importante destacar algunas de las modificaciones que oportunamente decidiéramos reacceptar.

En primer término, se propicia aceptar la modificación introducida por el Honorable Senado en el artículo 89 con relación a las alícuotas del gravamen. La sanción que originariamente diera esta Cámara incluyó para las personas físicas una tabla de alícuotas que, según el monto a regularizar, va del 6 al 12 por ciento; a las personas físicas les correspondía la escala del 6 al 12 y a las sociedades de todo tipo, sólo el 12 por ciento. El Honorable Senado modificó esta disposición, fijando una escala que va del 2 al 10 por ciento y partiendo de una base de 20 mil australes, que es mucho menor a la que nosotros habíamos establecido. Además, la gradación del 2 al 10 por ciento también incluye a las sociedades de personas, quedando la alícuota del 10 por ciento exclusivamente para las sociedades de capital.

En la revisión de esta norma hemos considerado adecuado aceptar este punto de vista del Honorable Senado. Si bien es cierto que puede traer aparejada una disminución de la recaudación, por otro lado permitirá ensanchar notablemente el espectro de contribuyentes de los impuestos que se normalizarán por esta norma. De esta manera cumpliríamos el objetivo de este proyecto, que no reside tanto en la recaudación —que el gobierno naturalmente necesita—, sino en producir una normalización que nos permita contar con una mayor base de contribuyentes. En su oportunidad explicité con datos precisos la cantidad de contribuyentes y los montos, diferenciados por tramos, que cada uno de ellos estaba sufragando al Estado.

Otro aspecto importante que hemos recibido es el que atañe al régimen de coparticipación, que fue un reclamo permanente de los sectores de esta Cámara y del Honorable Senado. Hemos creído oportuno aceptar plenamente la modificación del Honorable Senado.

No hemos considerado conveniente dar curso a las modificaciones relativas al sistema de autarquía de la Dirección General Impositiva, porque ellas restan virtualidad al régimen que le hemos querido otorgar a este organismo que, según nuestro criterio, está funcionando muy bien en su misión de recaudar impuestos y está mejorando diariamente: sus sistemas se están modernizando y mensualmente observamos que las recaudaciones superan a las del mismo mes del año anterior, tal como ha ocurrido en enero de 1987.

Tampoco hemos creído oportuno aceptar el régimen de promoción dentro de una ley de normalización impositiva, ya que la rebaja de las alícuotas posibilita que se incorpore una mayor cantidad de contribuyentes. Además, se estaría creando una suerte de discriminación o de privilegio en favor de algunos contribuyentes que, por el hecho de contar con tenencias dinerarias en moneda nacional o extranjera, tendrían la posibilidad de pagar el cincuenta por ciento de lo que abonarían quienes, habiendo evadido impuestos, hayan invertido su capital en otro tipo de bienes, muchas veces de carácter reproductivo.

Quedando a disposición de la Honorable Cámara para cualquier aclaración que los señores diputados soliciten sobre temas puntuales, la mayoría de la comisión aconseja a la Honorable Cámara el voto favorable para el dictamen de mayoría, con las modificaciones que mencioné al principio de mi exposición.

Sr. Presidente (Silva). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: a fines del mes de octubre de 1986 esta Cámara sancionó un proyecto —sobre la base de una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo— en el que se proponía una regularización impositiva, comúnmente denominada blanqueo de capitales.

Se trata de un régimen de excepción por el que se vende a un módico precio impunidad fiscal a todos aquellos que hayan evadido impuestos. Es la primera vez en nuestro país que un Poder Ejecutivo constitucional envía una norma de esta naturaleza al Congreso de la Nación.

El tema se discutió en este recinto, pero salió un mal proyecto; lo dijimos en forma intensa y extensa. Utilizamos todo nuestro poder de persuasión para modificar algunas de sus normas; en algunos casos lo logramos, pero no fue suficiente.

En términos generales la interpretación de que no era un buen proyecto fue compartida por el Honorable Senado de la Nación, y es así que en esta oportunidad estamos considerando nada menos que veinte modificaciones que ese cuerpo introdujo al proyecto sancionado en esta Cámara. Todas esas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad. De esta forma se demuestra que teníamos razón en muchas de las cosas que decíamos.

En el dictamen de minoría nuestro bloque acepta diecisiete modificaciones introducidas por el Senado de la Nación y rechaza las tres restantes. En una de ellas el señor miembro informante de la mayoría se anticipó a coincidir con nosotros.

Las modificaciones propuestas por el Senado son de distinta naturaleza. Hay algunas que son meramente técnicas y por lo tanto no es necesario demorarnos en demasía en su tratamiento. Hay otras de menor trascendencia, pero que sin embargo enfocan de manera más uniforme y coherente el proyecto que nos ocupa. Finalmente, señor presidente, hay otras modificaciones que son relevantes y sobre las que debemos detenernos unos instantes. Deseo referirme a algunas de estas últimas modificaciones.

Si bien el Senado de la Nación no satisface todas nuestras aspiraciones, por lo menos con su iniciativa permite que se perfeccione el destino de la recaudación en lo vinculado con la distribución entre las distintas jurisdicciones. Propone distribuir en forma automática la mitad para la Nación y la otra mitad para las provincias. Establece un régimen de participación que, si bien no satisface las aspiraciones de nuestra bancada en cuanto a una ley de coparticipación federal de impuestos, por lo menos

permite superar la negativa original del Poder Ejecutivo de coparticipar estos recursos con las provincias argentinas.

La sanción de esta Cámara fue una sanción de compromiso y no suficientemente clara, ya que establecía un régimen de coparticipación que daba lugar a muchas interpretaciones. En ese aspecto el Senado ha puesto los puntos sobre las íes y felizmente el tema de la coparticipación ha sido aceptado tanto en el dictamen en mayoría como en el de minoría. De cualquier manera, debemos señalar que el régimen de la coparticipación federal de impuestos es un tema en el que el Congreso de la Nación está en deuda con el conjunto de las provincias argentinas. Además, está siendo mal manejado, porque hasta hace poco tiempo las quejas que se escuchaban provenían de los gobiernos administrados por el justicialismo, y por ello se decía que había de por medio razones políticas o de otra naturaleza; pero ahora se escuchan quejas similares de parte de gobiernos provinciales administrados por el radicalismo. A pesar de que el señor presidente las quiera acallar, esas quejas existen y se han hecho públicas.

No se puede desconocer el estado en que se encuentran las economías regionales y las finanzas provinciales, cualquiera sea el partido político que las gobierne. Esta es una deuda que todavía tenemos con las provincias argentinas.

Otro tema que consideramos de particular importancia es el relativo a una propuesta que realiza el Honorable Senado de la Nación para incorporar a este proyecto un nuevo capítulo cuyo título es: "Exteriorización de capitales con destino a la reactivación del aparato productivo nacional". En los diez artículos que contiene este capítulo se propone lo que en su título sintetiza: la reactivación del aparato productivo nacional mediante el incentivo fiscal.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: si bien existe la posibilidad de perfeccionar esta norma, debemos reconocer que es uno de los pocos intentos que se han hecho para incentivar la inversión.

Esta es una norma que en forma clara y precisa tiende a reactivar el aparato productivo nacional. En ella están contemplados todos aquellos que sean poseedores de capitales negros pero líquidos, expresados en moneda extranjera o en australes, y que los destinen a algunas de las tantas finalidades que el mismo articulado expresa. Esos capitales tendrán una quita impositiva,

pero lo que fundamentalmente se busca es la reactivación e inversión en el país.

Nosotros apoyamos la propuesta del Senado ya que en otra oportunidad el señor diputado Bianciotto había presentado una iniciativa cuyo objetivo era similar al que el Senado de la Nación ha votado por unanimidad.

De todos modos, el dictamen de mayoría no acepta esta propuesta de reactivación. Aquí cabe preguntarse por qué la mayoría de la comisión rechaza esa iniciativa.

Como no tiene sentido hacer conjeturas, voy a leer las razones expuestas en el informe que acompaña al dictamen de mayoría, firmado por el señor diputado Jesús Rodríguez. En una parte de dicho informe se dice textualmente: "Por otra parte, con relación a la inversión inducida que fuera planteada en el capítulo V, ..." —se refiere al tema que ahora estamos considerando— "... agregado por el Honorable Senado, se desestima la incorporación de este capítulo en la normalización tributaria, ya que su inclusión no responde a los objetivos del proyecto..."

Se rechaza la inclusión de una propuesta de reactivación o de incentivo al crecimiento económico porque no responde a los objetivos del proyecto. ¡Claro que no responde! En su oportunidad habíamos demostrado que el único objetivo que tenía este proyecto era el de recaudar y saciar la sed de la Tesorería de la Nación. De cualquier manera y aunque ésa fuera la razón principal, no es incompatible con la posibilidad de reactivar y hacer crecer a este país, salvo que se piense que las cantidades de inversión que se realizan son suficientes. La realidad indica todo lo contrario.

Esa es la razón por la cual no se acepta la inclusión de este capítulo. Aquí se presenta un conflicto de objetivos. Es claro que lo hay, ya que los objetivos buscados por la mayoría de la comisión al elaborar su dictamen y los propiciados por la Secretaría de Estado de Hacienda no son los mismos que subyacen en la sanción unánime del Honorable Senado que incluyó, por supuesto, el voto favorable de los senadores radicales.

Afirmo que el objetivo explicitado por la mayoría de la comisión en su dictamen es el de obtener recaudación, mientras que el señalado por el dictamen unánime del Honorable Senado y el de la bancada que represento es el de lograr la reactivación.

¡Cómo no va a haber un conflicto de intereses! Somos nosotros, los diputados, quienes debemos decidir entre recaudación y reactivación y tratar de compatibilizar ambos proyectos. Evidentemente, la opinión de la mayoría de la

comisión parece ser que dicha compatibilización es imposible.

Quedaría pendiente la opinión que en relación a la posibilidad de reactivación tienen otras comisiones especializadas de esta Cámara, a las cuales también les incumbe el tema. Me pregunto qué es lo que opinan las comisiones de Comercio, de Industria y de Finanzas. Aquí estamos dando la posibilidad de que capitales líquidos que actualmente están exclusivamente en la especulación se encaminen a la producción. Esto es algo concreto, no es un discurso.

Nos encontramos ante una posibilidad que nos otorga una legislación muy clara y que nuestra bancada apoya. Ya que no nos alcanza la cantidad de votos para propiciarla, quisiéramos contar con el suficiente poder de persuasión como para transmitir nuestra convicción a todos los señores diputados: aquí se terminaron los discursos, porque estamos ante un proyecto que permitirá invertir capital no en cualquier cosa sino en alguno de los rubros especificados en los incisos que el mismo proyecto detalla.

El contribuyente tendrá la posibilidad de disminuir su carga fiscal, y el país la de ganar en inversión. ¿Cuál es el costo fiscal? No existe, ya que las alícuotas que el proyecto fija son totalmente caprichosas. A partir de determinadas alícuotas, se dice que si se pierde recaudación se genera un costo fiscal; pero esa fijación de alícuotas es, como dije, absolutamente caprichosa. Y si eventualmente existiera algún costo fiscal, ¿cuánto más ganaría el país en reactivación económica, en mejores salarios, trabajo, mayores ingresos y justicia social, concepto este último que felizmente ha pasado a ser patrimonio de todos los argentinos!

Creo que la necesidad de recaudación de la Tesorería nacional ha tapado con una especie de velo una posibilidad mayor para el país, una posibilidad muy concreta. Por eso insistimos y nos detenemos en el análisis de este punto en particular, porque nos parece que la aprobación de este proyecto justifica inclusive el sacrificio ético que sin duda habrán tenido que hacer muchos de los diputados radicales al abandonar ciertos conceptos mantenidos durante toda su vida sobre estos temas.

Esta posibilidad superior que se brinda justifica ese sacrificio. Aquí hay una necesidad del Estado que se puede explicar, ya que se trata de una necesidad de reactivación y crecimiento que abona cualquier sacrificio de tipo ético que eventualmente surja en torno a estos temas.

Llego al término de mi exposición con una última curiosidad: ¿qué va a suceder en el

Honorable Senado cuando vuelvan a tratar este proyecto? De conformidad al procedimiento de formación de las leyes que establece nuestra Constitución, el Senado requerirá una mayoría especial para insistir en su sanción original. ¿Y por qué no habría de insistir en ella, ya que fue una sanción por unanimidad? ¿Cuál sería el impedimento o qué podría haber sucedido de nuevo en el país para que el Senado cambiara su sanción original y se apartara de las opiniones que tan claramente sostuvo?

Al respecto, en oportunidad de considerarse este tema en el Honorable Senado el señor senador Trilla manifestó lo siguiente: "Pero, fundamentalmente, quiero particularizar sobre el agregado al capítulo V, por el cual procuramos mejorar la reactivación económica y las posibilidades de inversión. En realidad, siempre hablamos de la necesidad de mejorar la inversión y nos pareció prudente establecer algún delineamiento a través de un impuesto que no fuera estrictamente fiscal sino que, además, tuviera visos de contribuir al desarrollo económico de la República".

¿Qué va a decir el senador Trilla cuando este proyecto vuelva a aquella Cámara? ¿Modificará su voto y sus argumentos? ¿Qué va a suceder en el Honorable Senado de la Nación? ¿Qué es lo que hace suponer a los señores diputados que el Honorable Senado va a cambiar su voto? A menos que no se diga con claridad que no se desea tener una ley de regularización impositiva. Si el Senado de la Nación mantiene su voto —así debe ser porque nada ha sucedido y nosotros estamos ratificando y defendiendo ese pronunciamiento—, ¿de dónde obtendrá el oficialismo, en esa Cámara, la mayoría necesaria para imponerse? Ella no existe.

Quizá nuestro tono algo vehemente no condiga con la precisión y claridad de nuestros objetivos. Nos hemos detenido en uno de los veinte puntos que contempla la sanción del Senado porque lo consideramos como el más importante y significativo; por ello, invitamos una vez más a todos los señores diputados a que nos acompañen con su voto en la sanción de este capítulo V que introduce el Honorable Senado. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monserrat. — Señor presidente: en el debate realizado en octubre del año pasado fijamos con claridad nuestra posición absolutamente contraria a esta iniciativa por razones de fondo que van mucho más allá de las diversas consideraciones que guardan relación con el articulado del proyecto, a las que ha hecho mención

el señor miembro informante. Lo hicimos de esa manera porque entendimos que esta llamada ley de regularización impositiva —vulgarmente conocida como “blanqueo de capitales”— constituye un hecho injusto y absolutamente inmoral.

La iniciativa viene en revisión del Honorable Senado y esta Cámara debe considerar la aceptación o el rechazo de las modificaciones introducidas, y creíamos que el tiempo transcurrido desde el primer debate en esta Cámara debería haber servido para reflexionar sobre las cuestiones de fondo.

Nosotros insistimos en señalar que estamos en presencia de una nueva contradicción entre el diagnóstico de los diversos problemas que afectan al país y las respuestas que se dan para enfrentarlos. Basta señalar al respecto una de las frases incluidas en el mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó este proyecto de ley que fue enviado al Congreso con fecha 29 de agosto de 1986. Allí se habla sobre lo ocurrido en el país en los años anteriores, diciéndose que no es necesario abundar en detalles acerca de la reciente historia económica del país, porque al respecto basta sólo con señalar sus concretas consecuencias: deterioro del aparato productivo, incremento desmesurado de la actividad especulativa, fuga de capitales al exterior y desarrollo de una economía subterránea de gran magnitud dedicada a la especulación financiera en desmedro de la inversión productiva. Estos son los antecedentes de lo ocurrido durante los años de la dictadura, los que crearon entonces condiciones que lejos de hacer deseable tender un manto de impunidad sobre esos hechos, aconsejan su investigación para aplicar las medidas reparadoras que correspondan.

Hemos visto también similares contradicciones en lo referido a la deuda externa, cuyo carácter injusto e ilegítimo se ha reconocido; pero se la ha legitimado y estatizado y se la está pagando.

En cuanto al sistema financiero, es evidente su estado caótico y de desquiciamiento total, con un alto grado de especulación y corrupción; pero aún no ha sido modificado sustancialmente. Lo mismo podría decirse de otros temas acerca de los cuales sería innecesario efectuar comentarios en este momento, pero que reflejan lo frecuente de este tipo de contradicciones.

Creemos que aquí estamos en presencia de una contradicción más porque a nosotros no nos convencer en absoluto los argumentos que se han dado para justificar la sanción de una

iniciativa de esta naturaleza. El argumento referido a la necesidad de recaudar fondos para el fisco nos parece absolutamente endeble, desde el momento en que cuando se trató este tema en octubre de 1986 se nos dijo que podría producir recursos estimados en 400 millones de australes, es decir algo así como medio punto del producto bruto interno. Ahora se estima una recaudación del orden de los mil millones de australes. No advertimos los fundamentos del incremento de la cifra. Uno de ellos podría ser el proceso inflacionario que vive el país, pero evidentemente no podemos hablar, merced a los registros dados por los organismos oficiales en la materia, de un incremento del 150 por ciento en cinco meses.

Por otra parte, cuando se trató en comisión el tema de la estimación de la recaudación, el subsecretario de Política y Administración Tributaria sostuvo que lo que se pensaba obtener adicionalmente era consecuencia de una mayor evasión provocada precisamente por el anuncio de esta iniciativa en la fecha señalada, es decir en agosto del año pasado. Dicho funcionario señaló que este proyecto involucra la moratoria por pagos que presuntivamente pudieron haber dejado de hacerse en el curso de 1986 a raíz de la expectativa originada por el largo proceso de tratamiento parlamentario de esta iniciativa, y que es más que factible que el simple anuncio sobre este proyecto haya incidido en una menor recaudación desde entonces. De esta manera se demuestra que la reiteración de estas regularizaciones impositivas o blanqueos sólo logra con su anuncio promover una mayor evasión y de ningún modo corrige los problemas de fondo.

Por otra parte, señalamos en el debate anterior —y lo reiteramos hoy— que si el fundamento principal de la iniciativa fuera obtener más recursos para el fisco, existirían muchos procedimientos para lograr una suma que realmente no es de gran significación.

Recordemos que con el ahorro obligatorio, sancionado hacia fines de 1985, se estimó una recaudación para el año 1986 del orden de los 443 millones de australes, cifra que trasladada al presente sería similar a la que se piensa recaudar por este concepto.

Por esta razón discrepamos tanto del argumento del oficialismo cuanto de lo que ha expresado hace un instante el señor diputado Matzkin. No creo que el único objetivo haya sido el de recaudar. Para recaudar tan exiguo monto existen muchos otros arbitrios, sin necesidad de acudir a un procedimiento que im-

plica contrariar elementales normas de equidad tributaria y de justicia.

En cuanto al otro argumento empleado en el sentido de que esta iniciativa podría servir para reactivar la economía, creemos que no es valedero sino absolutamente endeble.

Tampoco será útil el proyecto en lo que se refiere al reempadronamiento de los contribuyentes, que pudo hacerse por medio de la reforma oportunamente sancionada a la ley 11.683.

Por consiguiente, esto no servirá para eliminar la economía subterránea que castiga al país sino que, como lo hemos señalado anteriormente, contribuirá a fomentar este tipo de prácticas antisociales.

En uno de los artículos del proyecto —que no ha sido modificado por el Senado— se establece que los importes correspondientes al gobierno nacional serán destinados a la creación de un fondo para el mejoramiento de la infraestructura social. Respecto de este punto aprovecharé el amable ofrecimiento del miembro informante de la mayoría, diputado Vidal, en cuanto a que estaba dispuesto a brindar mayor información sobre algunas cuestiones referidas a este tema. En este sentido, interpreto que la creación de un fondo para el mejoramiento de la infraestructura social debería implicar la creación de una cuenta especial para inversiones públicas, es decir, para inversiones de capital fijo; pero no advierto que esto surja claramente de la ley. Entonces, resulta interesante que se nos aclare por medio de qué mecanismo se va a garantizar esta aplicación de los fondos.

En síntesis, creo que el verdadero objetivo de este blanqueo es contemplar el reclamo de los sectores de poder económico que durante muchos años —en ese marco global al que hice referencia al principio y que está reflejado en el mensaje del Poder Ejecutivo— llevaron a cabo un verdadero vaciamiento económico y financiero del país, con un alto grado de corrupción y de especulación.

Resulta una grave inconsecuencia aceptar este proyecto en estos términos, porque me recuerda lo que se trató cuando recién se instalaba el gobierno constitucional. Por un lado se sancionó la derogación de la autoamnistía impudicamente establecida por el gobierno militar y, por otro, en el orden económico, se aprobó un proyecto de declaración solicitando al Poder Ejecutivo que investigue a los responsables de lo que en ese momento denominamos terrorismo económico.

Estos temas estaban íntimamente relacionados, porque se reprimió precisamente para llevar adelante políticas antinacionales y antisociales,

creando las condiciones que permitieron esa verdadera subversión económica que soportó el país.

Tres años después se aprueba el proyecto de ley de punto final que, como ya dijimos, es peor que una amnistía; y ahora se pretende sancionar este blanqueo de capitales, que establece una impunidad que nos llevó a reflexionar en el debate anterior que estábamos en presencia de una verdadera venta de indulgencias por una módica suma.

Estos son hechos que marcan una diferencia fundamental con lo que ocurría en aquellos días de diciembre de 1983. En esos días había expectativas esperanzadas, a diferencia de lo que hoy pasa en el país, cuando vemos con preocupación que esto puede llevar a un estado de real descrédito, desasosiego y desesperanza en la opinión pública.

Con relación a las reformas introducidas por el Senado, concretamente hay cuatro temas fundamentales. Algunos están referidos a la técnica legislativa y otros a la modificación del sistema de coparticipación. También cabe señalar el capítulo que se intenta agregar sobre las inversiones inducidas a través de una rebaja del 50 por ciento, y quizá la cuestión más importante es que se abarata este blanqueo, llevando la escala del 2 al 10 por ciento, en vez del 6 al 12 por ciento, como lo establecía el proyecto original.

Estas modificaciones han sido aceptadas parcialmente por la mayoría, pero nosotros entendemos que no cambian en absoluto la cuestión de fondo.

Siempre se ha dicho que éste habrá de ser el último blanqueo de capitales, pero en los últimos treinta años nuestra historia registra dieciocho sanciones —entre decretos, decretos leyes y normas de facto— mediante las que se establecieron moratorias, regularizaciones, etcétera, algunas de ellas con el carácter de verdaderos blanqueos, como la norma que hoy estamos considerando.

En este sentido, estaríamos tratando la séptima iniciativa de ese orden, registrándose un promedio que no supera los cinco años entre una y otra legislación. Esta costumbre de otorgar un jubileo impositivo tiene en esta oportunidad una mayor gravedad que en las anteriores, porque se realiza después de un período donde ha habido un desarrollo desmesurado de todo tipo de maniobras especulativas en el plano económico y financiero.

No creo que sea necesario hacer mayores referencias a esto, a los autopréstamos, al vaciamiento financiero del país, aspectos todos que aún no han sido debidamente investigados, como tampoco lo ha sido la deuda externa.

Esto que parece ser que se justifica desde el punto de vista de la mayoría, a nuestro criterio resulta absolutamente injustificable, con lo cual mantenemos coherencia con lo dicho en el pasado.

No voy a hacer referencia a lo que se manifestó en el debate del anterior blanqueo dado en el marco de un gobierno constitucional, como fue el del año 1973, por parte de voceros de la Unión Cívica Radical; pero sí creemos que no hay razón alguna para aprobar este proyecto porque es la oportunidad menos propicia. Sólo podría considerarse una iniciativa de esta naturaleza en una etapa en la que estuvieran claramente planteados cambios profundos y estructurales que permitieran a nuestro país recuperar el poder de decisión nacional sobre los resortes fundamentales de la economía, avanzar hacia una drástica redistribución del ingreso en favor de los sectores populares, cortar los lazos de la dependencia y crear las condiciones para no seguir sometido a esa verdadera exacción que se produce a partir del endeudamiento forzado a que fue impulsado. Ahora nos hallamos frente a este proyecto en el marco de un sistema impositivo que, pese a las reformas de carácter parcial que ha tenido en los últimos tres años, continúa manteniendo sus caracteres regresivos y de hondo corte antisocial.

Por eso reiteramos nuestra oposición absoluta y total a esta iniciativa que no habrá de traer ningún beneficio para la economía del país ni para la angustiante situación social que vive el pueblo argentino; en cambio, violenta elementales normas de equidad tributaria, favoreciendo a quienes han delinquido, pues este régimen especial incluye no sólo a los evasores de impuestos directos sino también a quienes retuvieron gravámenes cobrados al pueblo, como es el caso del IVA, pues al trasgredir sus normas no transfiriendo esos recursos estafaron al Estado y al conjunto de la población.

Por estas razones reiteramos nuestro absoluto rechazo a este intento de transformar en blanco lo que es negro, de convertir en limpio lo que es sucio, y es por ello que exhortamos a la bancada mayoritaria a que no consume esta decisión pues, por todas las razones expresadas, consideramos que constituye un verdadero despropósito.

Sr. Presidente (Pugliese). — No encontrándose presente en este momento en el recinto el señor diputado Zaffore, a quien le corresponde hacer uso de la palabra según la lista de oradores que obra en la mesa de la Presidencia,

tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Conte. — Señor presidente: el bloque de la democracia cristiana mantendrá su postura de rechazo firme y frontal de esta iniciativa a cuya consideración ahora nos abocamos con motivo de las reformas que oportunamente el Honorable Senado introdujera en la sanción originaria de esta Cámara. En tal sentido nos alienta el mandato que sobre el particular nos diera nuestra convención partidaria. A esta altura del debate muy pocas palabras serán necesarias para reiterar nuestra posición.

Como se ha señalado, el blanqueo interno importa legalizar uno de los periodos de corrupción económico-financiera más graves que registra nuestra historia. No alcanzamos a advertir que tal regularización pueda sustentar el imprescindible cambio global y drástico que nuestro sistema impositivo y financiero requiere. Las razones fiscales cortoplacistas que se invocan tampoco aseguran en modo alguno que se vayan a introducir elementos que modifiquen sustancialmente un régimen que debía ganarse un espacio diferente una vez reconquistada la democracia. Pero el motivo primordial que inspira nuestra posición está dado por el significado que esta iniciativa tiene en relación a la fuga de capitales habida en el país.

El sentido del proyecto en consideración importa clausurar la perspectiva de todo análisis futuro en cuanto a la legalidad de la deuda externa y significa dejar de lado la posibilidad de investigación sobre la fuga de capitales que desangrara al país. Involucra asimismo abandonar definitivamente la perspectiva de lo que en el precedente debate que se registró en este recinto calificáramos como el empeño patriótico para provocar el retorno forzoso de estos capitales tan necesarios para el país y que huyeron bajo aquel régimen de corrupción al que aludíamos.

Los problemas de nuestra sujeta economía se vieron agravados con los anuncios respecto de la capitalización de la deuda externa. En pocos meses esta cuestión se ha convertido en tema central de la discusión nacional y ciertamente está siendo resuelta sin la participación de este Parlamento. Frente a las resistencias y límites que inicialmente se pretendió imponer en relación a tal capitalización, vemos cómo día a día se cede a la presión de los acreedores, recorriéndose un sendero que hace que la llamada capitalización de la deuda externa se convierta en el pago anticipado de un pasivo incobrable y en la entrega de activos internos

que han sido fruto de un prolongado y duro esfuerzo nacional.

Nuestra posición no es nueva ni improvisada. Cuando el año pasado se debatió el tema de la deuda externa, hicimos un gran esfuerzo para tratar de lograr una fórmula de unidad nacional para examinar el problema de su pago y de su contrapartida, que consiste en la fuga de capitales. Poco tiempo después presentamos un proyecto de ley que trataba de establecer el reintegro forzoso de capitales, tal como ha ocurrido en otras experiencias internacionales de economías que sufrieron una gran destrucción, como es la que dolorosamente exhibía nuestro país.

La modificación positiva consistente en excluir de los beneficios de este proyecto a los funcionarios gubernamentales de todo nivel que ejercieron cargos a partir del 24 de marzo de 1976 no está mostrando sino la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Podemos compartir la modificación que permite que el producido de esta normalización impositiva se reparta por igual entre la Nación y las provincias, pero este aspecto se inscribe dentro de la lógica interna de una norma que rechazamos como tal.

Tenemos la convicción de que el futuro de nuestro país no se va a construir sobre ningún olvido ni sobre ninguna clausura de los problemas éticos, económicos y sociales que arrastra la República, sino que es la reafirmación de la memoria colectiva y la ratificación del empeño de enfrentar la herencia recibida lo que nos dará la energía suficiente para responder a un reclamo que inexorablemente nos formulará nuestro pueblo cuando se debatan definitivamente a fondo los problemas de sujeción, de dependencia, de desigualdad y de injusticia social que se están gestando y desarrollando en nuestra patria.

Sr. Presidente (Pughiese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Guelar. — Señor presidente: son varios los sentidos que permiten explicar el concepto de lo que significa "blanquear". El primero de ellos es el literal y surge del diccionario. Así podríamos observar que para la Real Academia Española "blanquear" significa: "Poner blanca una cosa, dar una o varias manos de cal o de yeso blanco, diluidos en agua, a las paredes, techos o fachadas de los edificios".

Parecería que este sentido del significado de "blanquear" no es el que se utiliza cuando nos referimos a este proyecto. Sin embargo, algo podemos rescatar de esas definiciones, porque probablemente el resultado de este blanqueo no nos alcance ni siquiera para comprar el yeso y la cal que nos permitan blanquear los edi-

Quizás esté efectuando una afirmación un poco exagerada. Tal vez el secretario de Hacienda tenga algo de razón cuando con gran optimismo dijo que iba a recaudar mil millones de australes en base a esta iniciativa. La perspectiva del señor Brodersohn es curiosa, porque el año pasado dijo que iba a recaudar quinientos millones de australes. Fijense que la aceptación de la reforma del Senado implica una reducción de la tasa de este impuesto en un 17 por ciento. Sin embargo, la recaudación prevista por el señor secretario de Hacienda aumenta en un ciento por ciento. Además, cabe agregar que en el proyecto originario al que se refería el señor secretario Brodersohn no existía la coparticipación federal. Por lo tanto, el ciento por ciento iba a ser recaudado por la Tesorería e incluido en el presupuesto de la administración central. Esto también ha sido modificado. Partiendo del proyecto original, si fuera cierta la perspectiva expuesta por el señor secretario de Hacienda, no podría recaudarse más de 250 millones de australes.

De todas formas, quizás sea cierto algo de lo que señala la Secretaría de Hacienda y se pueda recaudar más de lo que yo digo. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque la tasa del impuesto a las ganancias correspondiente a 1986 es del 33 por ciento, mientras que la del blanqueo es del 10 por ciento. Entonces, los contribuyentes van a denunciar activos existentes al inicio del ejercicio para poder blanquearlos utilizando esta tasa. Así es que posiblemente aparezca algún austral más en el renglón del blanqueo.

Pero debemos ver el renglón siguiente, que es el del impuesto a las ganancias, y allí notaremos que la recaudación bajará sustancialmente. Entonces, estamos vistiendo a un santo y desvistiendo a otro.

La conclusión es que las aseveraciones del señor secretario de Hacienda faltan a la verdad, para utilizar una terminología que me enseñara el señor presidente de esta Honorable Cámara.

El blanqueo también puede analizarse desde el punto de vista económico y fiscal. Cuando hablamos del sentido económico nos referimos al rol orientador que una medida de esta naturaleza debe ejercer sobre el conjunto de la economía. Podemos mencionar algunos antecedentes que asignaban este rol al blanqueo: un proyecto del senador Gómez Centurión, otro muy importante que no logramos tratar en esta Cámara y que fuera presentado por nuestro compañero el diputado Bianciotto, y una iniciativa propuesta por la Secretaría de Industria que no fue escuchada por otros sectores del gobierno.

Nuestra bancada impuso el criterio de la coparticipación y de la reducción progresiva de la

tasa. Con nuestra propuesta también desbarataríamos de la iniciativa original la posibilidad de que bonos externos en manos de residentes extranjeros comprados al 60 o al 65 por ciento de su paridad fueran pagados por el Banco Central al ciento por ciento. Reitero que esto se debe al esfuerzo de nuestra bancada.

Compartimos el sentido fiscal de incrementar la recaudación, pero si se lo considera en forma aislada, tal como se lo presenta en el proyecto original, es insuficiente. Es necesario orientar la economía para lograr el objetivo de la reactivación, tal como lo planteara con claridad el señor diputado Matzkin.

También podemos analizar el blanqueo por medio del sentido ético y moral. Cuando en enero de 1984 esta bancada propuso un blanqueo fuimos acusados de inmorales, al igual que cuando hace pocos meses atrás, en el proyecto de ley de presupuesto alternativo para 1986, incluimos 500 millones de australes en concepto de recaudación por el rubro blanqueo. En esta última oportunidad estaba presente el secretario de Hacienda, quien se burló de la iniciativa propuesta por nuestra bancada.

Sin embargo, en las normas que proponíamos se tenía en cuenta el sentido moral y ético. Era necesario trazar una raya divisoria para diferenciar la época en que en la sociedad argentina cada familia y cada empresa debía considerarse un Estado en sí misma y pelcarse para poder sobrevivir en una jungla salvaje. No es lo mismo la evasión en la época del autoritarismo que la que se lleva a cabo durante la vigencia de un poder legitimado por la soberanía nacional y popular. Era necesario trazar una raya para marcar la frontera y poder finalmente identificar al contribuyente con el ciudadano. En aquel momento estaba presente el sentido ético y moral y ahora se ha perdido.

También se ha perdido el sentido de la oportunidad para recuperar la fe y la esperanza y permitir de ese modo la reactivación. Todos esperábamos la reapertura de las fábricas y el crecimiento de la economía en su conjunto. Ese era el deseo de quienes ganaron y de los que perdimos; sin embargo, ello no fue posible, salvo que ahora festejemos que en 1987 estamos llegando a 1984. Si seguimos con esta metodología, en 1989 podremos plantear que estamos llegando a 1962.

Existe un sentido político que afirma que blanquear es pasar de lo oculto a lo público y que significa terminar con una Argentina clandestina y marginal para tener un país de cara a la legalidad.

En estos tres años de democracia hemos marchado por ese camino. Comenzamos a legalizar esa sociedad clandestina para transformarla en legal y pública. Hemos recuperado los derechos políticos y se está restituyendo los derechos gremiales, a veces por decisión institucional y otras por la legítima presión de los sindicatos, que han logrado avanzar. Seguramente dentro de poco tiempo el Senado de la Nación considerará el proyecto sobre divorcio vincular y con ello podrán ser superados otros márgenes de ilegalidad. Pero aún este transvasamiento tiene un largo camino a recorrer.

En la actualidad, un tercio de la población argentina vive del cuentapropismo, no porque lo haya elegido sino porque simplemente es el único recurso que tiene frente a la imposibilidad de trabajar en forma organizada en fuentes de producción industriales, comerciales o agropecuarias. Por este motivo surgió una multiplicidad de pequeñas artes y oficios que llevaron —reitero— a que un tercio de la población argentina esté dedicado al cuentapropismo.

No creo que sea posible liquidar este fenómeno; nos hemos acostumbrado a vivir con él, pero debemos encuadrarlo en una sociedad democrática de pequeñas empresas que se integren al sistema recaudatorio. Debe formularse una propuesta para que este sector sea productivo y contribuya cotidianamente al engrandecimiento del conjunto de la sociedad; tenemos que sacarlo de esa marginalidad; debemos jerarquizarlo. Esa es la deuda que tenemos con la sociedad y con ese sector que sigue siendo marginal. Este es el gran desafío del blanqueo, que no se agota con este proyecto que hoy estamos considerando y que es absolutamente insuficiente para lograr la integración de la sociedad argentina.

Por último, recuerdo que cuando este proyecto ingresó a la Cámara el señor presidente anunció que estaba dispuesto a tragarse este sapo vivo. Considerando que es ésta la primera sesión que el cuerpo realiza en el curso del corriente año, no lo vamos a forzar a que lo haga en forma pública y por ello nuestra bancada lo excusa de ese compromiso.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zaffore. — Señor presidente: estamos tratando un proyecto al que el Senado de la Nación introdujo algunas mejoras que no fueron aceptadas por la comisión interviniente.

Las objeciones que deseo plantear —y por las cuales anticipo mi voto negativo— no se fundan tanto en el texto del dictamen de la comisión sino en el contexto económico-social que le da marco. Esta situación nos lleva a la convic-

ción de que no estamos ante un proyecto de normalización impositiva que va a formar parte de una nueva política y que implique el borrón y cuenta nueva que da base ética y política a los blanqueos. Es decir, ellos se justifican en tanto y en cuanto a partir de una nueva política económica e impositiva no se generen nuevos motivos para la evasión y se brinden incentivos para invertir en la actividad productiva.

No es éste el caso. Por el contrario, la economía subterránea que existe en la Argentina continuará, especialmente por obra del plan austral. Tampoco tendrá lugar, en virtud de este blanqueo, una repatriación de capitales fugados del país, justamente porque el plan austral es un instrumento de desaliento a la inversión. En consecuencia, el contexto en el que se lo pretende aplicar convierte al blanqueo en un instrumento puramente fiscalista.

En rigor de verdad, se trata lisa y llanamente de un nuevo impuesto, que a mi juicio no corresponde aprobar en el contexto de la política que se está aplicando. Cabe decir también, respecto de este nuevo impuesto, que hay muchos interrogantes de carácter aritmético. Como bien se ha dicho en este recinto, se nos informó en el seno de la Comisión de Presupuesto y por intermedio de los funcionarios del Poder Ejecutivo que se iban a recaudar 500 millones de australes; ahora sabemos por la información trascendida de las cifras incluidas en el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que, a pesar de que se rebajan las alícuotas, el gobierno pretende o anuncia que va a recaudar el doble.

Estamos sin duda ante un proyecto puramente fiscalista, un nuevo impuesto que si bien contribuirá a regularizar algunas situaciones personales, significará una nueva exacción al sector productivo y una transferencia de sus recursos hacia el sector estatal. Al mismo tiempo, se trata de una norma elaborada con una gran imprecisión técnica, como surge de la contradicción de cifras en las que ha incurrido el secretario de Estado de Hacienda.

Por estos motivos adelanto mi voto negativo al proyecto en consideración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alende. — Señor presidente: el señor diputado Matzkin nos ha dicho que éste es un tema constitucionalmente intrincado y complejo, y tiene razón. ¿Qué va a ocurrir cuando lo que se rechaza parcial o totalmente es más de lo que se acepta? ¿Qué va a ocurrir con el agregado del capítulo V, que el senador Trilla elogiara en forma tan entusiasta y que ahora se rechaza?

Yo agregaría que éste es un tema jurídica y técnicamente intrincado, complejo y —en la forma en que se presenta— muy difícil de entender.

Me he tomado el trabajo de leer los debates que se produjeron en esta Cámara y en la de Senadores y realmente no es inteligible, no hay manera de comprender cómo en este proyecto se han tocado temas puramente vinculados a los impuestos a las ganancias, de sellos y al valor agregado.

¿Es que acaso no se han votado ya catorce leyes vinculadas a la Dirección General Impositiva, cuya autonomía ahora se pide? ¿No era suficiente con dictar una nueva ley para enmendar cualquier asunto estrictamente vinculado a los impuestos y contribuciones?

Cuando tuvo lugar el debate acerca de la distribución de los recursos, se habló de si ellos eran para la Nación o para las provincias. Se abordaron materias correspondientes al presupuesto, que esta vez espero ingrese pronto a la Cámara, ya que tenemos la obligación de sancionarlo oportunamente y no a fin del período de sesiones ordinarias, tal como ocurrió con el presupuesto para 1986.

¿Cuál es la esencia de este proyecto? ¿Qué es lo que intrínsecamente existe como propósito de la iniciativa y lo que se quiere disponer? Creo que no es difícil determinar, ya que la cuestión se centra en dos artículos: el 4º y el 17. El primero de ellos se refiere a la normalización de los patrimonios no justificados, es decir, el patrimonio neto que está en el exterior; el segundo —observado debidamente por el señor diputado Copello en el anterior debate—, establece que no están obligados a declarar el origen o fuente de sus ganancias —quedando liberados de toda acción civil, comercial, penal, cambiaria, administrativa y profesional— quienes han actuado contrariando el elemental cumplimiento de sus deberes con el Estado nacional e incurriendo en acciones ilegales que con esta norma el gobierno no sólo perdona sino que también premia, porque no mira hacia atrás.

El señor senador Trilla ya manifestó que el gobierno no desea perseguir a nadie; sólo aspira a que se respete la legislación que se establezca para el futuro, sin mirar hacia atrás. De manera que estamos considerando una iniciativa que puede ser denominada ley de blanqueo o de perdón para quienes han burlado sus obligaciones con el Estado, y justamente algunos de los puntos que deben ser investigados son los hechos anómalos que en la Argentina tienen su historia, una historia de blanqueos que en su mayoría está coronada por los gobiernos de fac-

to. Es decir que es necesario analizar la razón por la que se dictan las leyes de blanqueo, que en nuestro país comienzan con Aramburu y Rojas y continúan con Onganía, Martínez de Hoz y Wehbe. Esto sucedió en los años 1956, 1962, 1969, 1970, 1973, 1977, 1982 y 1983.

Entendemos que con la sanción de este proyecto se entiende a beneficiar a un sector perfectamente determinado en la vida de la República, lo cual constituye el punto final para el terrorismo económico. Así nos comprenderemos perfectamente bien. Claro está que yo me hago cargo de estas dificultades que tiene el sector de la mayoría, porque con la sanción de esta ley va a perder su virginidad en materia de blanqueo. Esta virginidad la perderá a una edad bastante madura.

En esta Cámara se han recordado las expresiones radicales durante el gobierno peronista del doctor Cámpora, cuando se pronunciaron en contra del blanqueo. Ahora quedarán equiparados a los gobiernos de Frondizi, cuando era ministro de Economía el ingeniero Alsogaray, y del doctor Cámpora, pues por primera vez en toda su historia el gobierno radical va a establecer una ley de blanqueo.

De manera que —como lo señaló el señor diputado Monserrat— todo este sistema que se está manejando implica al oficialismo en un proceso de fondo mucho más complicado, pues no se trata sólo de un simple blanqueo.

Aquí se han mostrado las primeras páginas de los diarios, que informan de las sanciones a los militares. ¿Y en lo económico? ¿Qué se ha hecho para castigar a los verdaderos responsables de esta fuga de capitales del país?

Recuerdo —porque lo he leído— la sacudida que provocaron las expresiones del doctor García Vázquez cuando concurrió a esta Cámara en un momento de extrema preocupación por la situación económica, al informar —consta en el Diario de Sesiones— que la Argentina tenía a fines de 1983 una deuda externa de unos 40 mil millones de dólares. Y agregó ante los señores diputados que si no hubiera sido por esa conspiración económica contra el país, la Argentina habría tenido en esa misma fecha —diciembre de 1983— un beneficio de 10 mil millones de dólares.

En esta Cámara se produjeron expresiones coincidentes de todos los sectores. Votaron radicales, peronistas, intransigentes, todos exhortando al Poder Ejecutivo para que tomara una acción directa sobre ese terrorismo económico que con este régimen va a ser perdonado.

Recuerdo muy bien que todos los señores diputados subrayaron con énfasis su posición. El

señor diputado Rabanal, que por entonces presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda, afirmó: "Reclamamos del Poder Ejecutivo un exhaustivo análisis y la aplicación de las medidas necesarias para todos los funcionarios que ejercieron la conducción económica del Estado y dentro de la conducción económica entendemos también que están incluidos aquellos que manejaron los resortes de la estructura social argentina. Debemos deslindar todas las responsabilidades para que quede bien establecido el capítulo de cargos y que los responsables por complicidad, silencio o connivencia caigan dentro del concepto de justicia que queremos implementar. Todo esto no puede quedar bajo el manto de la impunidad, del silencio o del olvido sino que sin apelar a la venganza tenemos la obligación de que la justicia alcance a quienes han estado fuera de la ley".

El diputado José Luis Manzano exhortó al Poder Ejecutivo para que inicie las acciones ejemplificadoras contra quienes fueron responsables de la conducción económica. Estos son hombres con nombre y apellido, uno por uno, desde directores nacionales; en todo caso que salven su responsabilidad ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que deberá iniciar esas acciones. En esa oportunidad se solicitó al Poder Ejecutivo que hiciera llegar a la Fiscalía todos los antecedentes —que nunca llegaron— para que ella actuara, destacándose en ese sentido, desde luego, la intervención del señor diputado Monserrat, con su habitual coherencia.

¿Qué tiene que ver todo esto con la fuga de capitales? Tengo sobre mi banca —y me gustaría que se publique— un estudio realizado por una de las primeras bancas internacionales del mundo, la Morgan Guaranted, quien a propósito de que un empleado le produjo desfalcos por nueve millones de dólares realizó un estudio sobre la fuga de capitales en el mundo y sobre la corrupción que en este tema existe en América latina. En este documento se establece con claridad que la deuda externa de la Argentina —50 mil millones de dólares en 1985— debería ser de sólo mil millones de dólares si no fuera por la fuga de capitales. Asimismo se consigna la correspondiente a otros países del mundo y se señala la enorme desproporción que existe con los capitales argentinos fugados al exterior.

Este documento fue puesto a disposición del cuerpo de prensa en la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional celebrada en Washington en 1984. Pero

qué casualidad! Cuando la gente de prensa pidió toda la documentación, ésta había desaparecido. Se dice en esa investigación: "Las cosas se hacen de otra manera en América latina, que es otra forma de decir que prevalecen las comisiones, los pagos secretos, los sobornos y los pagos en negro, que son aceptados como norma; y por extensión se constituyen en un ingrediente necesario para el éxito de las prácticas comerciales en la región".

De manera que éste es el tema a analizar. Estamos frente a un terrorismo económico que quedará invicto. ¿En qué queda todo el reclamo que en su momento formuló la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo para que se sintiera a los responsables de todo esto? Existieron cómplices amparados en la secular inocencia de nuestras fuerzas armadas; pero aún ninguno fue castigado. Muchos estarán veraneando en Punta del Este o manejando sus grandes capitales.

Es por esto que pensamos que este proyecto debe ser llamado por su nombre y es por esa misma razón que hemos pedido oportunamente la formación de comisiones investigadoras, no sólo para el caso de la Italo sino también para todo aquello que implique un desfalco en la vida argentina, como el caso que nos ocupa; que ahora quedará no sólo prácticamente amnistiado por medio de esta norma sino que además se verá beneficiado, porque en virtud de esta ley no habrá posibilidad alguna de aplicar en el futuro cualquier tipo de sanción, ya sea penal o financiera, no sólo a personas físicas sino también a las empresas de las que forman parte.

De allí que nos pronunciaremos negativamente con respecto al proyecto en análisis, pero formulando un llamado a esta Honorable Cámara para que insista en la actitud asumida en diciembre de 1983, porque ésa es la reparación que espera la República.

Sabemos muy bien que un general que menciona en mi libro le solicitó a Martínez de Hoz que preparara su plan cuando ya el golpe de Estado se había elaborado, porque cabe decir que no es que el golpe haya surgido de la nada en el mes de marzo, sino que venía preparado de antemano. Conocían el estado de salud del general Perón, lo cual me consta porque cuando cayó Cámpora fui citado al Ministerio de Guerra, donde me preguntaron cuál era mi criterio profesional sobre la salud de Perón y su futuro. El cálculo de ellos era de dos años. Dije que el mío era de uno, y así fue.

El golpe estaba perfectamente elaborado. Ya se venía pergeñando con Videla. Expulsó a Numa Laplane y evitó que el coronel Damasco fuera ministro del Interior. Esto fue urdido y se dio en el momento oportuno. Y junto a esto no sólo estaba la doctrina de la seguridad nacional, sino la enajenación del patrimonio de la República.

Nosotros hemos sido inclementes con los responsables de la doctrina de la seguridad nacional porque, como lo sostuve en una reunión anterior, queremos que se respeten los artículos 16, 18, 22 y 29 de la Constitución Nacional, que nunca más haya violaciones constitucionales, que nunca más todos estos *ad lateres* continúen manejando sus patrimonios en desdoro de las fuerzas económicas y financieras de la Nación y que nunca más puedan volver.

Por eso, no los perdonemos; que no pierda la virginidad el sector de la mayoría. Sean duros, porque éste es el enemigo de hoy y el enemigo de mañana. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: se me ha dado expreso mandato del Partido Liberal de Corrientes para votar en contra del proyecto en consideración hasta que no sea remitido el proyecto de ley de coparticipación de impuestos.

Ese mandato tiene un fundamento racional y sensato, porque el proyecto en análisis dispone que se reparta el 97 por ciento de lo que se recaude de la siguiente manera: un 50 por ciento para la Nación y otro 50 por ciento para las provincias, este último en relación directamente proporcional al régimen transitorio de distribución de los recursos federales a las provincias.

En su momento se proyectó el régimen con vigencia hasta el 31 de diciembre próximo pasado, con la posibilidad de extenderlo si no se sancionara una ley nueva sobre el particular. Especulativamente se incluyó en el cálculo de gastos para el ejercicio pasado una tasa de inflación del orden del 28 por ciento anual, cuando en realidad superó el 80 por ciento. Por ello esto constituirá un grave perjuicio para las provincias.

Pero más allá de lo que es circunstancial — las cifras asignadas, los porcentajes de inflación —, resulta de orden primario y por ende de suma importancia la sanción de un régimen de coparticipación impositiva. No puede sujetarse a las provincias al mero tratamiento discrecional del poder; no puede sometérselas a los acuerdos circunstanciales logrados entre gallos y medianoche, en que aquéllas buscan un mayor índice participativo mientras la Nación lucha y logra para las provincias los menores guarismos posi-

bles, especialmente aquellas en vías de desarrollo, las más atrasadas económicamente, como es el caso de Corrientes.

Para la mejor salud de la República es necesario que nos rijamos por pautas legales y que tanto el poder central como las provincias se sometan ante la majestad de la ley, en lugar de que éstas sean avasalladas por aquél, pues ello implica el fin del federalismo argentino.

El principio de reserva es precisamente una pauta sustancial del sistema republicano y consiste en saber de antemano cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno, pues tanto gobernantes como gobernados se rigen y están sometidos a la ley, y su incumplimiento importa sanciones de carácter civil, administrativo y hasta penal.

En consecuencia, para preservar la salud de la República, para pugnar por la sanción de un régimen de coparticipación fiscal y para evitar un nuevo y grosero atropello a las provincias —que vendría a consagrar definitivamente el sistema unitario sobre el federal—, votaré en contra de este proyecto y a favor del federalismo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Clérici. — He de formular un breve comentario, señor presidente, pues en oportunidad del anterior tratamiento de esta iniciativa el señor diputado Alsogaray explicitó claramente las razones éticas y económicas que nos llevan a votar en contra de este proyecto de ley.

Nos abocamos nuevamente a la consideración de un régimen que va a tratar con extrema generosidad a aquellos que vivieron en la ilegalidad en lo económico. Como estamos en un país donde se nos dice que se busca el estado de legalidad y que procuramos alentar la productividad y desalentar la especulación, quisiera simplemente hacer una pequeña referencia en relación a los empresarios y contribuyentes que aspiran a vivir en la legalidad y cumplir con sus obligaciones fiscales. Ocurre que si en un determinado momento tales responsables no pueden cumplir con la totalidad de su obligación impositiva en la fecha fijada por la DGI, deben abonarle al ente recaudador fiscal un interés mensual del orden del 15 por ciento.

En un país que en la actualidad presenta una tasa de inflación del 5 o del 6 por ciento mensual, quienes intentan cumplir con la ley pagan un interés real del 9 o del 10 por ciento mensual. Entonces, me pregunto si ésta es la forma en que vamos a buscar que el país ingrese en la legalidad. De esta manera vamos a alentar

a quienes se dedican a la producción y a desincentivar a quienes viven de la especulación?

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin. — Señor presidente: comprendo que la deuda externa es un formidable problema de la sociedad argentina. Nuestro partido y nuestro gobierno no sólo coinciden con este punto de vista, sino que también así lo han expresado enfáticamente en todos los foros de la Tierra.

Lo que no comprendo es cómo, mediante un mágico reduccionismo, todos los problemas del país puedan quedar circunscriptos a la evaluación de la deuda externa, de la fuga de capitales y de sus consecuencias.

La estructura económica argentina presenta una característica enormemente regresiva desde el punto de vista del financiamiento del sector público. La historia de nuestro país muestra que se han gravado los consumos populares y que se abandonó ideológicamente la vía de cobrar impuestos a la renta, no discriminándose con justicia social en favor de aquellos ciudadanos con menor capacidad contributiva.

La cantidad de contribuyentes y la calidad de sus patrimonios registrados constituyen el universo que debe tomarse como punto de referencia de un sistema de planificación de la hacienda pública. Yo no sé por qué estas estadísticas, que sin duda se relacionan con el tamaño de nuestro producto y de nuestra economía, son equívocas y difíciles de tener en cuenta. Desconozco cuál es la hipótesis de economía negra que manejan los señores diputados, pero me parece de una enorme irresponsabilidad pasar de rondón por este problema que resulta insoportablemente discriminatorio para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias con relación a quienes evaden constante y consecuentemente sus responsabilidades sociales.

Estas cuestiones son tan viejas como el mundo. Seguramente frente a todas las estrategias de normalización se podrá decir que es la última, pero ciertamente no hay estrategia posible para hacer más justo nuestro sistema tributario que no parta de la base de brindar la oportunidad a todos los ciudadanos argentinos de que coloquen en regla sus patrimonios frente al resto de la sociedad.

Cuando un trabajador compra un paquete de cigarrillos, paga un tributo que no discrimina sus ingresos en relación con los del dueño de la fábrica que lo produce y que compra un atado de cigarrillos similar, siendo que ambos fuman en la misma proporción. Por supuesto que este

tributo es fácil de recaudar. Se trata de un ingreso casi automático. Lo mismo ocurre con el gravamen sobre las naftas y con otros remedios a los que nuestro gobierno también debió acudir como forma elemental de financiar genuinamente los gastos de la administración, evitando la emisión de moneda, que es una estafa al conjunto de la sociedad y que ha sido el modo casi excluyente de administrar las cuentas del Estado.

En tiempos de la dictadura el impuesto a la renta llegó a representar el 2 por ciento de la recaudación tributaria global. En el presupuesto para 1984 la participación proyectada de los impuestos directos en el conjunto de la recaudación tributaria era del 2,2 por ciento. Posiblemente ahora estemos en el 5 por ciento y quizá hayamos aumentado la recaudación en un 100 o un 150 por ciento. No recuerdo con exactitud estas cifras, pero lo cierto es que estamos marchando por un camino coherente con nuestro pensamiento político en cuanto al modelo de sociedad y a la naturaleza del Estado.

Esta norma que ha sacudido las fibras íntimas de numerosos de mis correligionarios es absolutamente indispensable para poder hacer en nuestro país borrón y cuenta nueva, pero no para amparar a los artífices de la fuga de capitales. Ella no significa complacencia hacia los que facturan en negro, hacia los que efectúan retenciones a los trabajadores pero no cumplen con los depósitos o hacia aquellos que tienen inmensos patrimonios sin declarar. Tal como ha ocurrido aquí, en países hermanos de América latina muchos descubrieron un pingüe negocio en la fuga de capitales. En todo esto coexisten problemas de derecho internacional privado y esta Cámara debe abocarse a su tratamiento. Sociedades de las más diversas nacionalidades aparecen como titulares de las cuentas de esos señores que llevaron a cabo la fuga de capitales.

No sé si con una norma de este tipo esos capitales volverán y si sus verdaderos titulares regresarán al país. De todas formas, el diputado Alende no tiene derecho a decir que con esta iniciativa se consagra su impunidad, porque ello no es verdad. La ley prevé con amplitud un sistema de disposiciones penales y comerciales que podrían aplicarse en cada caso.

La realidad es que nos encontramos con el actual funcionamiento de la economía, los problemas concretos de control y la dificultad de determinar qué porción de la actividad económica transcurre por el camino de la legalidad, cuál no y cuáles son las razones que permiten que ello ocurra. No podemos dejar de reconocer que la excesiva carga tributaria y los impuestos gravosos generan tendencias de evasión, de

la misma forma que el crecimiento del universo de los sujetos imposables permite reducir el porcentaje de dichos impuestos, lo cual redundaría en una mayor equidad.

Podemos gastar hectolitros de saliva para exponer nuestros argumentos, pero no tenemos derecho a ser tan ligeros en el examen de la realidad y en la evaluación de los acontecimientos. No cualquier circunstancia es válida para un discurso. Como dirigentes, debemos manejarnos con responsabilidad.

Aquí se presenta un problema tan viejo como el mundo y frente a él hemos propuesto una alternativa de solución que es inobjetable y que ha sido mejorada por el Senado de la Nación en lo que respecta a la coparticipación y a un conjunto de ventajas que reconocemos y que vamos a apoyar con nuestro voto.

Más adelante tendremos que trabajar en el problema de la fuga de capitales. Tendremos que ver dónde están y a qué países de América debemos exhortar en forma amigable pero firme para que modifiquen sus legislaciones a fin de evitar que esta telaraña que despojó a nuestro país de modo miserable siga haciendo lo mismo en otros países del mundo. De todos modos, este tema no tiene nada que ver con el proyecto que estamos considerando, ya que es de naturaleza diferente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: Mario Vargas Llosa —una de las cumbres de la literatura contemporánea latinoamericana— últimamente viene incursionando en el análisis de los problemas económicos y sociales de nuestros pueblos. En realidad la preocupación política de Vargas Llosa no es nueva; él tiene una vieja filiación marxista *aggiornada* a la luz de los nuevos tiempos que corren en todo el mundo con relación al enfoque, comprensión y visualización que merecen hoy los viejos dogmas de Carlos Marx.

Vargas Llosa, de regreso de alguna de sus inquietudes de ayer, formula algunas reflexiones muy interesantes sobre esto que ahora con cierta dosis de eufemismo se da en llamar economía informal o subterránea y que en el lenguaje tradicional se califica como economía negra. Y vemos que el tema —desde hace algún tiempo en otros países y en la Argentina últimamente— se comienza a analizar científicamente, porque hay una realidad que es la de las economías marginales que funcionan más allá de lo que son los cánones del Estado.

Eso que es pernicioso y que a veces importa la transgresión grosera de principios elementales de la sociedad, constituye un elemento que

debe ser debidamente ponderado por el Estado. En ese sentido, analizar leyes de esta naturaleza podría abrir la instancia de un importante e interesante debate.

Cuando en octubre del año pasado discutimos este proyecto en general, se insinuó la posibilidad de que con él se contribuyera a repatriar capitales que se han ido del país. Entiendo que es demasiado pueril pensar que los capitales se van o vuelven en función de leyes como la que hoy ocupa la atención de la Honorable Cámara. También es pueril creer que la economía subterránea de una sociedad se va a extinguir porque algún día el Estado generosamente brinde la posibilidad de regularizar esa situación.

Si se pretendiese lograr que la economía argentina se encauce en los márgenes formales que razonablemente debería tener en un país como el nuestro, coincidiríamos en la búsqueda de una solución; pero es evidente que nada de lo que aquí se ha dicho se compadece con la realidad intrínseca de este proyecto.

La iniciativa que hoy estamos considerando no persigue otro objetivo que el de allegar recursos a la Secretaría de Hacienda. Durante estas últimas semanas o meses hemos visto a su titular desesperado por obtener la sanción de una norma que le permita contar con los 500, 600 ó 700 millones de australes que se presume puede producir este nuevo impuesto que, en definitiva, va a cubrir los déficit presupuestarios que hoy tenemos que afrontar. Entonces, aprobar una norma de tal naturaleza, que para cada uno de quienes la voten importa en el fondo el sabor amargo de una declinación solamente por un interés fiscal, nos parece demasiado pequeño.

En oportunidad de la primera consideración en general de este proyecto lo voté negativamente, y por cierto que he de reiterar ese voto ahora. Lo haré aún más convencido de que ésta no es la vía apropiada.

Una norma de esta naturaleza no puede limitarse a allegar fondos a la Tesorería del Estado. Si otro fuera su sentido, otros sus efectos y otra la razón de su existencia, tal vez encontraríamos juntos las soluciones que todos quisiéramos hallar. Pero no es ese el camino seguido y por lo tanto no parece razonable acompañar esta propuesta con nuestro voto afirmativo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Vidal. — Señor presidente: teníamos hoy la misión de considerar no nuevamente el proyecto de ley de normalización tributaria, sino las reformas que al mismo introdujera el Honorable

Pero realmente es un tema tan trascendente en un año electoral tan importante como es este de 1987, que sin duda cada oportunidad será válida para tratar de colocarnos algunas cargas a los hombres de la Unión Cívica Radical.

Por ejemplo, se ha querido demostrar que estamos en contra de la inversión y que no aprobar el capítulo V significa atentar contra la justicia social. Es una nueva definición de ese concepto. Si alguien cree que haremos justicia social rebajándoles el 50 por ciento del impuesto a las tenencias financieras de moneda argentina y extranjera, realmente ya no entienden más el significado de la justicia social. En tal caso, me habría parecido más coherente decir que aquellos contribuyentes que evadieron impuestos pero que invirtieron en maquinarias para producir más, merecen que les rebajemos este impuesto, porque de alguna manera contribuyeron a sostener esta Argentina agobiada que nos dejó la dictadura y que lo estaba aun antes de la dictadura, porque tenemos memoria.

Naturalmente, respeto la opinión parlamentaria de los señores senadores, pero creo necesario tratar de convencerlos de que este no es el camino, que no se trata de agregar de alguna manera un privilegio peor. Tampoco es cuestión de tratar de hacer una suerte de ley de promoción por medio de esta norma, aunque ella no solamente procura incorporar recursos al Estado.

El Estado necesita de esos recursos porque estamos en el contexto de una economía de crisis. La colocación de nuestros granos, como resultado de una guerra comercial entre los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, nos ha restado 2.000 millones de dólares el año pasado. Es en este marco que el gobierno está buscando los caminos para sostener de alguna manera el contexto de la vida argentina.

Me pregunto cómo se compatibiliza la afirmación —que se sigue haciendo— de que lo único que queremos es obtener más recursos para el Estado con el hecho de que estamos aceptando la rebaja de las tasas. ¿Qué camino nos queda? Queremos perfeccionar el sistema tributario. Este proyecto llegó al final de la reforma y no al principio. También deseamos reinscribir a todos los contribuyentes.

Pero, ¡qué curioso! Se dice que han sido muy meritorias las modificaciones introducidas por el Senado; sin duda, algunas lo son. Pero no se ha mencionado aquella disposición —que ahora estamos revalidando— referente al establecimiento del Banco Nacional de Datos Fiscales con la obligatoriedad de declarar a partir de enero de 1988 todos los patrimonios registrables, lo cual

tiende a concretar la justicia social en el sentido de que el contribuyente pague en relación con su verdadera capacidad. De esta manera el Estado tendría la posibilidad de efectuar una redistribución no solamente en los sectores sociales sino también en los sectores de la economía a los cuales podremos impulsar con mayores recursos. Este es el sentido de la norma.

Si bien esto no nos gusta a los radicales —por que nunca nos gustó— tampoco nos agradan los últimos diez terribles años transcurridos en la República durante los cuales muchos empresarios —algunos hoy están sentados aquí— sabían que primero había que pagar los salarios, luego la electricidad y el gas, y como no alcanzaba el dinero se evadían impuestos. A ellos va dirigida esta norma, que quiere darles la posibilidad de que reinicien honestamente su contribución a la República. La iniciativa no persigue incorporar los capitales que se han fugado, los cuales —estoy convencido— no van a volver.

Por otro lado, el proyecto de ley se inscribe en el proceso de lucha contra la inflación, porque la economía negra es hija de la inflación. Este es el sentido de la iniciativa. Tampoco estamos amparando a los delincuentes porque la norma establece que ningún enriquecimiento ilícito quedará impune. No quisimos votar los *promissory notes* porque pensamos que no era oportuno, y en aquel momento dije que buscaríamos otra legislación específica para hallar el camino que nos permitiera repatriar capitales y resolver algunos aspectos de la deuda externa; pero no mediante este proyecto ni de esta manera.

No debemos buscar dobles sentidos; no estamos afrontando este debate livianamente. Nos cuesta hacerlo, como les ha costado a todos los argentinos lo ocurrido en las últimas décadas. Debemos ordenar la República y poner a cada uno en su lugar. Tenemos que buscar la manera de achicar el volumen de los impuestos y de que más paguen menos; tenemos en nuestra mente otras ideas para que los sectores del trabajo cuenten con mayores recursos, lo cual podremos conseguirlo mediante la rebaja de alguna alícuota impositiva. La del IVA, por ejemplo, es tremendamente alta e invita a la evasión, como así también a trabajar en forma inadecuada.

Además, tenemos confianza porque estamos obteniendo resultados en la administración fiscal. La Dirección General Impositiva no anda como debería según nuestros deseos, pero va caminando. Se nota una mejoría porque utiliza métodos positivos; su personal está más motivado. Hemos recuperado a muchos agentes que están trabajando en forma brillante y ésta no es

una expresión antojadiza, sino que la ratifican las recaudaciones tributarias, que cada vez son mayores.

En el mes de enero hemos superado los mil millones de australes y debe tenerse en cuenta que enero no es un mes que se pueda caracterizar como de alta recaudación.

La gente está volviendo a tomar conciencia de que un país sólo puede lograrse equilibradamente si todos cumplimos con nuestras obligaciones. Es cierto que por ahí se va a escapar algún pillo, pero ése seguramente va a lograr su cometido con esta ley o sin ella.

Esta ley nos va a permitir que hagamos todas estas cosas que yo sé que están en la conciencia de todos. Pero no podemos aceptar imputaciones de bajas intenciones, que no tenemos.

Queremos convencer al Senado de la Nación de que la solución propiciada en el capítulo V no es conveniente, pues aparecerán pillos que van a blanquear hacia adelante, ya que les abrimos la puerta para que lo hagan y porque no van a invertir en todos los sectores de la economía sino en aquellos que les posibilitarán efectuar la trampa. Quienes nos hemos ocupado de administrar impuestos sabemos cómo se hace esa maniobra. Por eso nuestra negativa y por ello tratamos de convencer a nuestro buen amigo el senador Trilla y a los demás senadores de que no es conveniente esa modificación. Si ellos no lo entienden, el proyecto volverá nuevamente a este recinto y aquí entre todos adoptaremos la medida que creamos conveniente, conjugando las distintas opiniones. Entonces nadie podrá decirnos que el sistema no permite encontrar los caminos de salida.

Este es el sentido de esta ley. No tiene absolutamente nada de inmoral en la circunstancia en que estamos tratándola. No sólo procuramos que blanqueen los que evadieron; tratamos además de armar la administración como aquel que recompone su fichero de deudores para poder cobrarles las cuentas.

La Dirección General Impositiva no puede seguir saliendo a buscar evasores en la oscuridad; lo tiene que hacer con elementos, datos y posibilidades ciertas de efectuarlo. Y esa es la intención.

Alguien sostuvo cuando se trató este tema que estábamos acuciados porque en diciembre no podríamos zanjar la situación financiera. Ya estamos en febrero y nada de eso ocurrió.

Alguien podría decir que no nos interesa la recaudación, pero sí nos interesa. Si en lugar de ser mil millones resultan más, serán bienvenidos porque esos fondos le hacen falta al presupuesto nacional que tendremos que considerar

este año. Esos fondos servirán para la redistribución y para efectivizar nuestro concepto profundo de justicia social, que compartimos con todos los sectores populares del país.

Ese es el sentido de este proyecto; no hay otro. No somos ni tan perversos ni tan bajos en nuestra función política.

Solicito a la Cámara que tome en cuenta estas palabras, que están expresadas con sinceridad y con pureza política. Deben comprender los señores diputados que estas disposiciones pueden tener imperfecciones, pero nosotros humildemente las rectificamos cuando nos las marcan, como lo hemos hecho en muchos de los aspectos de este proyecto.

Lo único que queremos es caminar hacia adelante en la búsqueda de la realización de la República. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: hemos llegado a un punto de la discusión de esta famosa ley de blanqueo de capitales en el que me surge una reflexión sobre la mecánica del debate.

A mi juicio, hemos caído en una suerte de espejismo o de existencialismo, donde cada cosa la vemos puntualmente en el momento y sólo en el momento. Y así, ante cada cosa —como si se tratara de las series televisivas que tratan de simplificar la realidad— empiezan a hacerse las listas de los buenos y las listas de los malos, las de los éticos y las de los no éticos, las de los progresistas y las de los no progresistas, las de los inflacionarios y las de los antiinflacionarios...

¿Podré tener algún día un micrófono que funcione bien, señor presidente?; ya he pasado por todas las bancas.

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúe, señor diputado.

Sr. Manzano. — Está todo dicho, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Eso es cierto, señor diputado, porque el proyecto ya había sido considerado en general.

Sr. Manzano. — He terminado, señor presidente. No voy a seguir haciendo uso de la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el dictamen de la mayoría de la comisión con las modificaciones enunciadas por el señor diputado Vidal. En consecuencia, en el punto 1 —“Aceptación total”— se deja sin efecto la aceptación de la supresión del artículo 31 dispuesta en el punto 7 de la sanción del Honorable Senado. En el punto 3, que se refiere a las modificaciones del

Honorable Senado que esta Cámara desecha, se incluye, a continuación del artículo 2º (punto 1 de la sanción del Honorable Senado), el artículo 31 (punto 7 de la sanción del Honorable Senado). En el punto 4 del dictamen —“Adecuación de remisiones”— sólo se mantiene la que dice: “Artículo 28, inciso c) pasa a ser inciso b) e inciso d) pasa a ser inciso c)”. Las restantes remisiones mencionadas en el punto 4 quedan sin efecto —lo mismo que las remuneraciones consignadas en los puntos 1, 2 y 3— en razón de la no aceptación de la supresión del artículo 31 dispuesta por el Honorable Senado.

Sírvanse emitir su voto los señores diputados.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Habiéndose aceptado parcialmente las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara revisora.

16

FONDO PERMANENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE SUBTERRANEOS (Orden del Día Nº 742)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Municipales y de los Territorios Nacionales y de Transportes, han tomado en consideración el mensaje 1.212 del Poder Ejecutivo mediante el cual se reitera el mensaje 678 y proyecto de ley del “Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires”; y, por las razones expuestas en el informe adjunto y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase el “Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos”, el que será destinado exclusivamente a las inversiones que originen los proyectos, construcciones, instalaciones, material rodante, gastos financieros y demás erogaciones necesarias para la habilitación de nuevas líneas subterráneas o ampliación de las existentes.

Art. 2º — El “Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos” se formará con los siguientes recursos:

- a) Saldo resultante de las liquidaciones de Transportes de Buenos Aires, Autovías Argentinas y Villalonga Furlong;

¹ Véase en el Apéndice (pág. 8001) el texto de la comunicación cursada al Honorable Senado.